



# UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

# CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS FORENSES

No. 15 – Año 10 - Mayo - Octubre 2021



**UMECIT**  
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Universidad Metropolitana  
de Educación, Ciencia y Tecnología  
UMECIT**

---

**CATHEDRA**

---

**No. 15 – Año 10  
Mayo – Octubre 2021**

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

## **MISIÓN**

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

## **VISIÓN**

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: [www.umecit.edu.pa](http://www.umecit.edu.pa)

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: [cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



**UMECIT**  
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## **AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

Dr. José Alberto Nieto Rojas  
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa  
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto  
Vicerrectora Administrativa

Dra. Magdy De las Salas  
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Mauricio Sierra  
Director Académico

Dra. Merlyng Flores  
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro  
Secretaria General

# **REVISTA CATHEDRA**

## **EQUIPO EDITORIAL**

### **EDITOR:**

Mgter. Gino Osellame  
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT  
ginosellame@yahoo.com

### **COEDITORES:**

Dra. Magdy De las Salas Barroso  
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT  
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto  
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT  
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

Dr. Juan David Nieto Rueda  
Relaciones Internacionales UMECIT  
jdnieto@diazcastillo.com

### **COMITÉ EDITORIAL:**

Dra. Ana Emérita de Villalaz  
Profesora emérita de la Universidad de Panamá  
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri  
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros  
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos  
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada  
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano  
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

# ÍNDICE

Gino Osellame

<b>Presentación de la edición.....</b>	<b>6</b>
--	----------

José Alberto Nieto Rojas

<b>Editorial.....</b>	<b>9</b>
-----------------------	----------

Artículos de investigación:

Andrés Sue González, Martha Edilsa Herrera, Eloísa García; Panamá

<b>Algunas estrategias para el fortalecimiento de los controles internos como medios para evitar los malos manejos de los bienes públicos.....</b>	<b>11</b>
--	-----------

Leidy Esmeralda Herrera Jara, Panamá

<b>Correos humanos: víctimas o partícipes.....</b>	<b>26</b>
--	-----------

Ensayos

Julio César Matos Quesada, Perú

<b>Realidad Socio-Jurídica de la víctima del delito en el Perú.....</b>	<b>53</b>
---	-----------

Irvin Castro M., Panamá

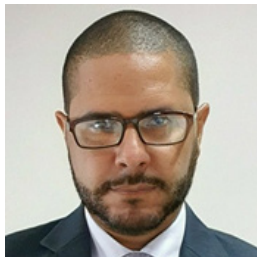
<b>La prueba científica en la investigación de los delitos.....</b>	<b>76</b>
---	-----------

Ana G. Avila Arrocha, Panamá

<b>Labor de la criminalística de campo en Panamá.....</b>	<b>84</b>
---	-----------

<b>Normas de publicación de la Revista.....</b>	<b>95</b>
---	-----------

## PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN



**Gino Osellame R.**

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología  
Panamá

Abogado y docente universitario

Editor de la Revista Cathedra

ginoosellame@yahoo.com

*“El derecho es la garantía de los más débiles, frente a los más poderosos”.*

**Luigi Ferrajoli**

La actual pandemia, producida por el temido virus de la COVID 19, sigue cabalgando a nivel global, y afectando sistemas de mercado, sociales, jurídicos y sobre todo de salud pública.

La irremediable situación de la sociedad global, ha transformado vertiginosamente, los cimientos de los sistemas democráticos, acrecentando las brechas sociales, debido al desconcierto que genera la desleal competencia, entre mercado y salud, entre economía y sociedad, entre derecho y anarquía.

La paliativa solución que los grandes teóricos, estadistas, y expertos en planificación plantean, se basa en la mayor inyección de recursos, para solventar lo que ha dejado un año de improvisación global. Utilizo este término para hacer énfasis, en la situación poco planificada de contrarrestar, una enfermedad sin fronteras, de medidas desproporcionales, pero mucho más rápida que cualquier proceso globalizador, y es que esta pandemia, es producto de nuestra realidad económica, y la economía moderna es Derecho.

Las Ciencias Jurídicas, hoy en día, juegan un papel tan importante para salvaguardar, los derechos de los más débiles, de los más afectados por la pandemia, de una jerarquía tal, como el de las vacunas que buscan frenar los contagios de la COVID 19.

Con esta breve cavilación, acerca del protagonismo del Derecho en la actual pandemia, presento en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la Edición 15, de la Revista CATHEDRA, correspondiente a mayo de 2021 a octubre de 2021.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, en donde plantea la importancia de los cambios tecnológicos y cómo esta ha impactado a las diversas áreas del saber, haciendo énfasis en esta ocasión al Derecho y las Ciencias políticas.

La edición inicia con el artículo **ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS COMO MEDIOS PARA EVITAR LOS MALOS MANEJOS DE LOS BIENES PÚBLICOS**, de los juristas y conocidos investigadores, Andrés Sue González, Martha Edilsa Herrera y Eloísa García, quienes realizan un importante estudio científico, acerca de la efectividad de las normas y el uso del presupuesto de las entidades públicas, además exponen una serie de argumentos, producto de una amplia investigación, para el mejorar el uso de los fondos públicos, en el desempeño de las funciones estatales.

Seguidamente el artículo de la Dra. Leidy Herrera titulado **CORREOS HUMANOS: VÍCTIMAS O PARTÍCIPES**, nos aporta un tema de contemporánea importancia, como lo son los aspectos generales que facilitan o permiten la implementación con mayor frecuencia del uso de correos humanos para actividades ilícitas, así mismo, la repercusión que esto genera en la sociedad.

Contamos en esta edición, con el beneplácito de publicar un ensayo científico de mayúscula importancia, para el derecho comparado en nuestro foro, y es que recibimos para esta publicación, desde la hermana República del Perú, un artículo del Dr. JULIO CÉSAR MATOS QUESADA, quien en su artículo **REALIDAD SOCIO-JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL PERÚ**, nos permite acercarnos a los efectos que recaen en la víctima dentro del proceso penal peruano, su poca consideración o protagonismo y la vejación que la norma ha omitido a nivel de la norma adjetiva y los derechos que se derivan de esta, para la víctima. Esta infaltable lectura, nos permite analizar que en nuestro sistema de derecho patrio, adolecemos de las mismas carencias que en el Perú, en favor de la parte más endeble, luego de producirse un ilícito.

En esta quinceava edición, contamos con dos ensayos en materia forense. El primero de ellos, escrito por Irvin Castro, perito forense e investigador, titulado **LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS** quien plantea que las ciencias forenses son cambiantes y se hace necesario una serie de capacitaciones y entrenamientos relacionados al uso de equipo forense, competencia de los peritos y las normas de calidad para poder enfrentar los diferentes avances delictivos que son utilizados por los grupos de delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Hace especial énfasis cuando afirma que la participación pericial es importante al momento que el perito es interrogado por su actuación pericial en el proceso, la cual debe ser



objetiva e imparcial, siempre recordando que es hombre de ciencia en donde toda su actuación es verificable, ya que existen leyes y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional ajustado a las buenas prácticas forenses

Cerramos esta edición con el ensayo de la perito forense e investigadora Ana Ávila Arrocha intitulado **LABOR DE LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO EN PANAMÁ** en el cual permite que conozcamos a cabalidad el rol de las ciencias forenses, para no solo para la investigación de delitos, sino también, para el complemento de las ciencias jurídicas y sociales. Desde el papel protagónico de los agentes de investigación científica, hasta la determinación de las pruebas, como elementos fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos, fundamentación y construcción por medio de evidencias de la teoría del caso.

Que disfruten esta interesante edición.

## EDITORIAL



**José Alberto Nieto**

Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia  
y Tecnología, Panamá  
rectoria@umecit.edu.pa

DOI: 10.37594/cathedra.n15.468

### EL DERECHO EN EL CIBERESPACIO

Estamos enfrentando grandes cambios en todas las disciplinas, entre ellas, el Derecho y las Ciencias Políticas que desde sus comienzos fueron reguladas por el famoso código de Hammurabi, conocido por “el ojo por ojo, diente por diente”, en el que se castigaban algunos delitos o infracciones de forma literal, pero los delitos al transcurrir el tiempo fueron evolucionando hasta tener hoy en día nuevas modalidades delictivas, dejando obsoletas las regulaciones en cada país, que en ocasiones hacen que los pueblos retrocedan, puesto que no avanzan como se requiere, con la misma rapidez que lo hacen las ciencias y las tecnologías.

En la actualidad, los programas que se desarrollan en modalidad a distancia -virtual, son los que más avance y productos investigativos tienen, los cuales permiten que se tenga desarrollo. Los inventos, la investigación e innovación avanzan a diario, a pasos agigantados, desde la aparición de Ross el abogado robot, que trabaja con la tecnología de Watson de IBM y que ha automatizado una gran cantidad de procesos jurídicos. La introducción de nuevas tecnologías en todas las disciplinas, los algoritmos que automatizan los procesos, antes citados, la aparición de la inteligencia artificial y las tecnologías de análisis de información, que son hoy por hoy, herramientas fundamentales para la toma de decisiones, entre muchas otras que existen y otras que se están trabajando para implementarlas.

Los nuevos programas de derecho requieren competencias digitales para que el abogado del futuro posea habilidades blandas y tecnológicas, que garanticen los derechos humanos, el debido proceso, que interpreten estadísticas y que no abandonen la particularidad del ser.

Las Universidades como generadoras de nuevos conocimientos, deben estar a la vanguardia, sin perder de vista que el derecho es una de las disciplinas más antiguas de la civilización y que no debe quedarse anquilosada, sino que debe estar evolucionando permanentemente por los grandes cambios que se generan actualmente: La era 4.0 o como le mencionan la “cuarta revolución

industrial” que componen entre algunas: el comercio electrónico, las certificaciones digitales, el certificado digital de firmas electrónicas utilizado por nuestra plataforma Cibernity.

Actualmente, quien tiene el acceso a la información domina el mundo, los delitos informáticos, la transmisión de mensajes de datos, los contratos electrónicos, el habeas data, los datos personales y el uso de bases de datos, lo que significa es que el Ciberespacio no tiene límites ni regulaciones supranacionales que restrinjan el progreso, pero, que se necesitan para regularizar las relaciones entre las sociedades modernas que se ven subordinadas a la innovación.

Para destacar, actualmente, se juzga al ser humano, a esto me refiero al proceso judicial, mediante el uso de las plataformas digitales, se realizan audiencias mediadas por la tecnología, muchas de ellas se atienden ya desde los hogares de los abogados, de los jueces, fiscales, magistrados y demás intervinientes. De esto se trata, todas estas dinámicas que existen hoy en día, donde siempre el ser humano debe reinventarse, transformarse, educarse, tal es así, que gracias a estos grandes avances, ha sido posible no desfallecer en épocas de crisis como la que se vive actualmente con la pandemia provocada por el coronavirus (2019-nCoV) que produce la enfermedad del Covid-19.

Para la Universidad UMECIT, pionera en la virtualización de los programas, ha sido muy importante el poder continuar prestando el servicio educativo en la modalidad a distancia (virtual) y estar adelante en la tecnología, con programas pertinentes, actualizados acordes con las necesidades de los países que componen el continente Americano y de habla hispana, que aporten al desarrollo profesional, tecnológico, humano a nivel local, nacional y mundial, contribuyendo con la formación de nuestros estudiantes, egresados y graduados, y con la modernización de programas en esta área del Derecho y sus diversas especialidades, porque se necesita un abogado con más conocimientos informáticos.

Finalmente, agradecemos a nuestros articulistas que han hecho posible un nuevo fascículo de nuestra revista Cathedra e invitamos a la comunidad académica a dar lectura a los diferentes artículos de nuestra revista y a dar sus opiniones con respecto a los mismos, que son de gran importancia para la sociedad del conocimiento.

## ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS COMO MEDIOS PARA EVITAR LOS MALOS MANEJOS DE LOS BIENES PÚBLICOS



**Andrés Sue González\***

Universidad de Panamá, Panamá

Andres.sue@up.ac.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7390-3628>



**Martha Edilsa Herrera\*\***

Universidad de Panamá, Panamá

marta.herrera@up.ac.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1664-1104>



**Eloísa García\*\*\***

Universidad de Panamá, Panamá

eloisa.garcia@up.ac.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4828-5204>

DOI: 10.37594/cathedra.n15.469

Fecha de recepción: 25/02/2021

Fecha de revisión: 19/03/2021

Fecha de aceptación: 21/04/2021

### RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad analizar la aplicación de algunas estrategias interrelacionadas que pueden intervenir favorablemente en el manejo de fondos y bienes del Estado, así como las fallas que se dan con mayor frecuencia en la ejecución del control interno en algunas instituciones educativas. Es un estudio documental, de las principales normas de Panamá, relacionadas al control interno, utilizadas por la Contraloría General de la República, Fiscalía de Cuentas y Tribunal de Cuentas. Estas normas son: la Constitución Política de Panamá en el Título IX La Hacienda Pública, CAPÍTULO 3, artículo 280, la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, que “por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Código Fiscal de la República y las Normas de Control Interno Gubernamental para Panamá, establecidas en el Decreto 106 del 5 de mayo de 1998 de la Contraloría General de la República.

\*Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Magister en Derecho Administrativo.

\*\* Magister en Métodos de Investigación y Evaluación Educativa.

\*\*\*Doctorado en Educación con énfasis en Investigación.

La investigación también incluye, un análisis de cómo se da la aplicación de cinco componentes interrelacionados del control interno, contenidos en las Normas de Control Interno Gubernamental de la República de Panamá, para ello se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas a empleados de manejo de fondos y bienes públicos (directores) de ocho (8) centros educativos. Además, se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, así como entrevista en profundidad a dieciséis (16) expertos con experiencia profesional en cargos de titulares de instituciones y personal supervisor con experiencia laboral en el Tribunal de Cuentas y Fiscalía General de Cuentas, para analizar las fallas más frecuentes en la aplicación del control interno.

**Palabras clave:** control interno, bienes públicos, corrupción.

## **SOME STRATEGIES FOR STRENGTHENING INTERNAL CONTROLS AS A MEANS TO AVOID THE BAD MANAGEMENT OF PUBLIC GOODS**

### **ABSTRACT**

The present research aims to analyze the application of some interrelated strategies that can intervene favorably in the management of State funds and assets, as well as the failures that occurs more frequently in the execution of internal control in some educational institutions. It is a documentary study of the main norms of Panama, related to internal control, used by the Comptroller General of the Republic, the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's office. These norms are: The Political Constitution of Panama in Title IX, Public Treasury, CHAPTER 3, Article 280, Law 32 of November 8, 1984, which "by which the Organic Law of the Comptroller General of the Republic is adopted, the Fiscal Code of the Republic and the Governmental Internal Control Norms for Panama, established in Decree 106 of May 5, 1998 of the Office of the Comptroller General of the Republic. The research also includes an analysis of how the application of the five interrelated components of internal control occurs, contained in the Governmental Internal Control Norms of the Republic of Panama, for this a questionnaire with open and closed questions to employees was applied. Management of funds and public goods (directors) of eight (8) educational centers. In addition, was applied a questionnaire with open and closed questions, as well as, in depth interview to sixteen (16) experts. They have professional experience in positions of heads of institutions and supervisory of personnel with work in the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's office, to analyze the most frequent failures in the application of internal control.

**Key words:** Internal controls, public goods, corruption.

## INTRODUCCIÓN

La historia demuestra que la población panameña, desde la presidencia de Florencio Harmodio Arosemena (1928 – 1931), consideró de importancia la economía del país, ya que una vez toma posesión de este alto cargo, solicitó asesoramiento al The National City Bank of New York, para que esta empresa les recomendara a expertos para realizar un estudio económico del país.

Es así como en 1929, la comisión liderada por Herbet D. Brown, vicepresidente de esa institución bancaria, elaboran el informe “La Economía de la República de Panamá”, redactado en en dos áreas: una económica y otra fiscal.

En la parte económica se proponía entre otros temas la creación de la Contraloría General de la República, y en la parte Fiscal, se sugería asegurar el control de fondos y bienes del gobierno.

Actualmente, los bienes públicos y su manejo están contemplados en la Constitución Política de Panamá en el Título IX La Hacienda Pública, CAPÍTULO 3°, ARTÍCULO 280, “Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que señale la Ley, las siguientes: 1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa. 2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley. La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá este último”.

Otra norma relacionada al manejo de bienes públicos es la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, “por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, y publicada en Gaceta Oficial el 20 DE NOVIEMBRE DE 1984, la cual tiene dentro de sus atribuciones y deberes llevar las cuentas de control de fondos y las cuentas generales de control del Gobierno Nacional de Panamá. En sus artículos 17, 18 y 20 establecen que:

“Artículo 17: Toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos o bienes públicos, está en la obligación de rendir cuentas a las Contraloría General, en la forma y plazo que ésta, mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que administren, por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas.

Para los fines de esta Ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además, a

todo servidor público o empleado de una empresa estatal facultado por la Ley para contraer obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a nombre o en representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa estatal.

Artículo 18: Rendición de cuentas, para los fines de esta Ley, es el informe rendido por la persona a que se refiere el Artículo anterior, sobre la actuación relacionada con los fondos y bienes que recibe, maneje, custodie o administre, dentro de un período determinado, e incluye el informe financiero correspondiente a la respectiva dependencia estatal. La Contraloría cuando lo estime necesario, podrá solicitar el envío de los comprobantes respectivos.

Artículo 20: Cuando la persona, al ser requerida por la Contraloría, no presente el estado de su cuenta con la documentación y valores que la sustentan, se presumirá que existe faltante por el monto correspondiente.”

Aspectos que son fundamentales para la presente investigación, ya que establecen quienes son los empleados manejo, y el alcance que tienen con respecto a la administración de la cosa pública.

Atendiendo este mandato la Contraloría General de la República de Panamá, elaboró el Manual Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, siguiendo las Normas internacionales dadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, el Código Fiscal de la República establece la responsabilidad de los empleados de manejo de fondos y bienes públicos en los artículos 10, 1089 y 1090:

“Artículo 10: Las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor monetario en casos de pérdidas o de daños causados por negligencia o uso indebido de tales bienes, aun cuando éstos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al producirse la pérdida o el daño.

De tal responsabilidad no se eximirán aun cuando aleguen haber actuado por orden superior al disponer de los bienes por cuyo manejo son directamente responsables, pero el empleado superior que haya ordenado la disposición será solidariamente responsable de la pérdida que la Nación hubiere sufrido a causa.

Artículo 1089: Los Empleados o Agente de Manejo que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, rendirán cuentas de conformidad con las reglas que establezca la Contraloría General de la República.

Artículo 1090: Todas las personas que tengan a su cuidado, o bajo su custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, serán responsables de ellos y de todas las pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de tales fondos.”

Es amplio el marco legal, que regulan los aspectos relacionados al control interno en el país. Sin embargo, son las Normas de Control Interno Gubernamental para Panamá, establecidas en el Decreto 106 del 5 de mayo de 1998 de la Contraloría General de la República, las que especifican operativamente el control interno, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y proporcionar criterios unificados para el control y evaluación de la gestión pública.

Esta norma establece en su artículo primero lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Emitir las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá de aplicación obligatoria a todas las instituciones que conforman el Sector Público Gubernamental, así como las disposiciones necesarias para la integración del control ejercido por las auditorías internas, con el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley le confieren a la Contraloría General de la República”.

Se contempla también en la norma los objetivos, ámbito de aplicación, responsabilidad por el diseño, funcionamiento y evaluación de la estructura del control interno y la contratación de servicios especializados. Estas normas configuran el contexto para un control adecuado en el seno de las instituciones.

Adicional, se incluyen en esta norma, cinco componentes interrelacionados del control interno los cuales son:

1. Ambiente de Control: consiste en disposiciones legales, políticas, procedimientos y acciones que reflejan la actitud de la administración, directivos y demás servidores públicos acerca de la importancia del control en una entidad.
2. Evaluación de Riesgos: Conjunto de actividades que ejecuta la administración para determinar la existencia de riesgos relevantes, que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.



3. Información y Comunicación: Consiste en la clasificación, registro y transmisión de información, veraz, exacta y oportuna, que permita a los servidores públicos llevar a cabo sus responsabilidades.
4. Actividades de Control: Son aquellas políticas y procedimientos, además de las incluidas en los cuatro (4) componentes, que la administración establece para cumplir sus objetivos.
5. Monitoreo: Se refiere a la evaluación continua o periódica de la eficacia y el diseño de operación de una estructura de control interno por parte de la administración, a fin de determinar que esté funcionando de conformidad con los planes y objetivos y que existan los mecanismos para detectar las desviaciones e incorporar los ajustes necesarios de manera oportuna.

En este sentido, este manual ofrece una guía para que las instituciones que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado Panameño, como los son: instituciones descentralizadas, seguridad social, municipios, empresas públicas, gobierno central y Organizaciones no Gubernamentales cuando manejen fondos o bienes del Estado, puedan establecer controles internos y proporcionar a los auditores criterios para evaluarlos.

Para la aplicación del control interno, se debe considerar que las instituciones son distintas entre sí, cada una debe elaborar el sistema de control interno ajustándolo al nivel de riesgo particular. La otra etapa es la puesta en práctica de este sistema de control y su correspondiente evaluación periódica.

Toda esta estructura, según la Norma de Control Interno tiene como objetivos:

1. Asegurar que la institución disponga de una estructura orgánica funcional que proporcione el marco adecuado para planificar, dirigir y controlar su gestión, así como para asignar responsabilidades y delegar autoridad en los diferentes estratos de la organización.
2. Asegurar que exista un plan de desarrollo de recursos humanos, que garantice la capacidad de un ente público para disponer del personal necesario para cumplir sus objetivos.
3. Proteger los recursos del ente mediante la identificación y evaluación de riesgos relevantes que afecten a la administración.
4. Procurar que la administración responda eficazmente a los riesgos, como medio para reducir los errores e irregularidades.
5. Asegurar la oportunidad, confiabilidad, exactitud e integridad de la información.
6. Garantizar que la información contable cumpla con los propósitos de identificar, reunir, clasificar, analizar, registrar y reportar sobre los resultados de las operaciones de los entes públicos y tener responsabilidad de los activos relacionados.

7. Establecer un adecuado sistema de control que garantice que las operaciones se realicen de acuerdo con un conjunto de reglas por escrito que señalan los procedimientos aprobados.
8. Definir y aplicar actividades de monitoreo que aseguren la evaluación continua o periódica de la eficacia del diseño y operación de la estructura de control interno, a fin de determinar que está de acuerdo con lo planeado y que se adapta fácilmente a los cambios internos y del entorno.

Es decir, la aplicación del contenido de esta norma debe garantizar el orden administrativo y el buen manejo de los recursos públicos.

No obstante, a pesar del tiempo en que se inició la discusión del tema y del marco legal con que cuenta el país en materia de control interno, aún existe el cuestionamiento de la población sobre el manejo transparente y efectivo de los fondos y bienes del Estado.

Posiblemente porque el control interno es un sistema integral que conlleva la interacción del Titular, funcionarios y servidores públicos de la entidad, los cuales deben garantizar la aplicación de las normas, para promover la eficiencia, eficacia, economía y así cuidar los fondos y bienes del Estado.

Además, deben presentar de manera oportuna y periódica la información, así como la rendición de cuentas a la sociedad, situación que a veces no se cumple en su totalidad por todas las instituciones del país.

Este es un proceso dinámico y continuo por lo que requiere ser evaluado periódicamente, por lo tanto, se requiere que se involucre todo el capital humano que labora en la institución.

Sin embargo, cuando la aplicación de las normas de control interno es débil, o por lo contrario está fortalecido, pero igualmente, se detectan malos manejos de fondos o bienes del Estado en una institución, ocurre que la Contraloría General realiza una auditoría que es remitida a la Fiscalía General de Cuentas.

La Fiscalía General de Cuentas emite una Vista Fiscal Patrimonial, que contiene la opinión de esta institución sobre la responsabilidad patrimonial de los agentes y empleados de manejo que están vinculados a la posible lesión patrimonial.

Luego, el expediente con esta vista fiscal patrimonial se remite al Tribunal de Cuentas para que determine si existen mérito para el llamamiento a juicio de él o los vinculados a la lesión

patrimonial mediante la resolución de reparos. De no existir una vinculación de los agentes o empleados de manejo entonces se dicta un cese del proceso.

Es importante mencionar, que este proceso de Cuentas es de carácter administrativo, y que igualmente puede ser investigado por el Ministerio Público en la Jurisdicción Penal. En resumen, se pueden establecer dos tipos de responsabilidades una de naturaleza administrativa y otra penal, en donde el principio de cosa juzgada no es aplicable entre una jurisdicción y otra, ya que la Ley 67 de 2008, que crea la Jurisdicción de Cuentas establece con claridad la no prejudicialidad entre el proceso penal y el proceso de cuentas.

Esta distinción entre ambos procesos es importante porque la finalidad del proceso de cuentas es la recuperación de los bienes y fondos del Estado, sustraído de forma irregular. No obstante, es posible que estos procesos para la recuperación de la cosa pública podrían disminuir produciendo una economía procesal, si se realizarán algunas acciones preventivas.

Estas acciones de prevención diseñadas a partir de la experiencia de los que participan día a día en el manejo de fondos y bienes públicos, así como de los que determinan la responsabilidad patrimonial.

El diseño de dichas acciones preventivas debe ser fundamentado en un análisis de la aplicación de algunos componentes interrelacionados del control interno que intervienen favorablemente en el manejo de bienes públicos y las fallas en la aplicación del control interno en algunas instituciones.

Este conocimiento de la realidad que viven los agentes y empleados de manejo de distintos niveles organizacionales, sus vivencias, opiniones o percepciones, sobre las buenas prácticas o fallas que se dan en la aplicación de las normas de control interno, servirían de apoyo para fortalecer el sistema en algunas instituciones y en otras pueden ser útiles para facilitar la aplicación del control interno.

Es por ello, que se consideró de interés realizar una investigación que respondiera las interrogantes: ¿cómo se aplican los cinco componentes del control interno, dados en la Norma de Control Interno Gubernamental en algunas instituciones del país? y ¿cuáles son las fallas en la aplicación del control interno en algunas instituciones?, desde la óptica de empleados y agentes de manejo de algunas instituciones seleccionadas (Ministerio de Educación y Universidad de Panamá) y de operadores que intervienen en el proceso de cuentas como son: la Contraloría General de la República, Fiscalía General de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

La investigación utiliza un método hermenéutico, un estudio documental y bibliográfico de la legislación vigente en el país sobre el control interno y manejo de fondos y bienes públicos.

Luego de este estudio documental, se seleccionó los cinco componentes descritos en la Norma de Control Interno que son los pilares para el manejo de fondos y bienes del estado de manera eficiente, y que dan las bases teóricas para realizar un análisis descriptivo de la aplicación de dichos componentes en las instituciones que forman parte de la investigación.

Para analizar estos cinco componentes se utilizó el método deductivo. Se recopiló información de ocho empleados de manejo que laboran en dos instituciones del estado del sector educativo: Ministerio de Educación (directores de escuelas) y Universidad de Panamá, utilizando la técnica de encuesta, en la cual se usó como instrumento de recolección de datos un cuestionario semi estructurado, es decir con preguntas cerradas y abiertas, administrado, por los investigadores.

El cuestionario estructurado en tres capítulos, en el primero las preguntas sobre datos generales del informante, en el capítulo 2, preguntas sobre algunas variables que intervienen favorablemente en el manejo de los bienes públicos (componentes descritos en la Norma de Control Interno), y en el capítulo 3, se incluyó una pregunta abierta sobre la opinión de los empleados de manejo sobre otros factores que favorecen el manejo de bienes públicos.

Además, para el análisis de las fallas en la aplicación del control interno, se entrevistó a un grupo de dieciséis expertos, seleccionados por su experiencia laboral relacionada a los procesos de cuenta, ya sea en la fase de investigación o la fase plenaria, de dos instituciones cuya misión es la recuperación de bienes y fondos del Estado: Fiscalía General de Cuentas y Tribunal de Cuentas.

A estos expertos se les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en una primera instancia. El cuestionario se organizó en tres capítulos, en el primero las preguntas sobre datos generales del informante, y el capítulo 2, preguntas sobre algunas fallas de implementación del control interno y en el capítulo 3, se preguntó sobre la percepción de los expertos en cuanto a las fallas en la aplicación del control interno.

Luego, se utilizó la entrevista en profundidad para indagar más exhaustivamente sobre la percepción de los expertos en cuanto a las fallas de la aplicación que mencionaron en el cuestionario antes descrito.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis del marco legal, podemos observar que en la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, no contempla medidas que eviten que servidores públicos, en su condición de empleados de manejo que hayan sido declarados responsables patrimonialmente por el Tribunal de Cuentas, continúen manejando fondos y bienes del Estado. Lo anterior constituye una debilidad ante la lucha contra la corrupción en el país.

El artículo 49 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, establece que el proceso de cuenta puede terminar con el acuerdo que logre el Fiscal General de cuentas con la persona investigada, siempre que se restituya el monto de la lesión patrimonial. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Tribunal de Cuentas, con lo cual quedará cerrado el proceso.

En este sentido, solamente se exige la restitución del monto de la lesión patrimonial, pero no se incluye en dicho acuerdo lo relativo a si la persona puede o no seguir ejerciendo como empleado de manejo de bienes y fondos, posterior a la firma de dicho acuerdo.

Por otro lado, el artículo 72 de la mencionada Ley, solo permite que el Tribunal de Cuentas en su resolución final pueda decidir la causa del proceso, mediante una resolución de cargo. Pero carece de alguna medida que garantice que el declarado responsable patrimonialmente pueda ocupar un cargo como empleado de manejo, posterior al proceso.

Del análisis de la información obtenida de los empleados de manejo, en cuanto a la aplicación de los cinco componentes interrelacionados del control interno contenidos en las Normas de Control Interno Gubernamental, se evidencia que los sistemas de control interno no están desarrollados en su totalidad dentro de las instituciones públicas investigadas, lo que dificulta que se constituya en una herramienta eficiente para el manejo de fondos y bienes públicos.

Ya que, al preguntárseles sobre la existencia de aspectos como: ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación sobre el control, actividades de control y monitoreo en la institución en la cual laboran, el 75.0 por ciento aproximadamente contestó que no existían dichos aspectos en la institución.

Esta situación hace que la institución sea vulnerable, es necesario que las autoridades a cargo sean conscientes de los riesgos. Un análisis de las amenazas y limitaciones que tiene la entidad pública permitirá que se planifique la prevención de dicho riesgo.

Una evaluación periódica es una herramienta fundamental, para asegurar que los controles internos funcionen de manera eficiente, lo que serviría de base para garantizar los fondos y bienes que se les ha encomendado, garantizando el cumplimiento de la misión y visión de la institución que administra.

Las Normas de Control Interno Gubernamental contienen estándares mínimamente aceptables, que deben estar contenidos en el sistema administrativo de las instituciones y organismos que manejen fondos y bienes del Estado.

No obstante, al preguntar a los expertos sobre si la falta de aplicación de los controles internos se debe al desconocimiento de sus normas y procedimientos, el 68.8 por ciento respondió que sí. Es decir que un alto porcentaje de expertos coincide en que existe desconocimiento en este aspecto.

Todos los entrevistados están de acuerdo en la relación directa entre falta de fiscalización en los controles internos y los malos manejos de bienes públicos.

Además, un 56.3 por ciento opinó que la falta de idoneidad para el cargo y falta de competencias en la aplicación del control fiscal es una causa frecuente en la falla de los controles internos y el 75 por ciento manifestó que existe la falta de conciencia sobre la importancia de los controles internos.

La misión y visión de las instituciones expresan de forma concisa los objetivos, propósitos, fines, lo que pretende hacer y el para quién lo va a hacer, por ello se preguntó a los expertos si la identificación clara de la misión y visión de la institución aumenta la eficiencia en los controles internos a lo que un 68.8 por ciento respondió que sí.

El 100.0 por ciento manifestó que existe una relación directa entre los actos de corrupción y las fallas en los controles internos.

Teóricamente se sabe que el control interno en las instituciones conlleva al buen manejo de bienes públicos, no obstante, en opinión de aproximadamente la mitad de los expertos consultados, la falta de controles internos muchas veces está relacionada con las órdenes superiores.

## CONCLUSIONES

Las fallas en el control interno se observan con mayor frecuencia en los últimos años, a causa de los problemas de actos de corrupción que salen a la luz pública. Cada día la sociedad panameña demanda, mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos y bienes del Estado.

Los administradores y directores entrevistados están comprometidos con la aplicación, ejecución del control interno, no obstante, opinan que se realizan muy pocas evaluaciones sobre ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación sobre el control, actividades de control y monitoreo, para garantizar la eficiencia del control interno.

Sin embargo, se puede observar que no es suficiente que exista el compromiso de hacerlo bien, es necesario evaluar continuamente que las instituciones van ajustándose al marco legal cada vez más. No obstante, primero hay que asegurar que todos los que participan en este compromiso tengan claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de rendir cuentas ante la sociedad.

Es necesario articular lo que implica el control interno ya que no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual puede causar confusión. Los empleados de manejo deben interpretar y aplicar las normas sobre control interno en sus instituciones las cuales tienen objetivos y funciones diferentes dentro del Estado panameño.

Estas diferencias en lo que abarca el control interno se da incluso a lo interno de una misma institución, dificultando la comunicación y diferencias en las expectativas de lo que se debe lograr.

En este sentido, es necesario ejecutar algunas acciones estratégicas en aspectos como la capacitación a los empleados y agentes de manejo. La sistematización de estrategias de educación continua sobre el marco legislativo relacionado al control interno cuyas normas son actualizadas constantemente, las buenas prácticas que existen en algunas entidades del Estado sobre esta materia facilitarían la aplicación del control interno en las instituciones.

Dichas estrategias educativas, deberán considerar facilitar el acceso del conjunto de leyes, principios, métodos, normas, reglamentos y procedimientos que regulan el control de la gestión gubernamental en las entidades y organismos sujetas al ámbito de la Ley, con el objeto que los empleados de manejo puedan contar de manera ágil con esta información, ya que dichos servidores públicos aun teniendo formación universitaria desconocen los fundamentos legales, contables, financieros y presupuestarios sobre el manejo de bienes y fondos del Estado.

Por la importancia, que tiene el control interno en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que la eficiencia en el manejo de los fondos y bienes del estado se traduce en la calidad de vida de todos, se sugiere que todas las acciones se sistematicen en un instituto que garantice una planificación



y ejecución operativa, entre ellas, la certificación de los empleados de manejo y evaluación de la aplicación del control interno en todas las dependencias del Estado.

Contar con una plataforma digital de consulta expedita, para los servidores públicos que tengan como función el manejo de fondos y bienes del Estado, que además contenga un espacio para compartir las buenas prácticas en el manejo de bienes públicos que se dan en cada sector de la gestión pública, por ejemplo, en el sector educativo los directores de centros educativos replican o manejan muchas veces el mismo proyecto o programas.

De esta manera se puede unificar criterios y armonizar buenas prácticas de control interno de la gestión pública, ya que ellos tienen como fortaleza que son docentes y pueden aprender entre pares con mayor efectividad.

Por otro lado, dicha plataforma también puede contener un área para el análisis de los vacíos legales, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, no tiene dentro de sus facultades, sancionar aquellas personas que resulten responsables patrimonialmente, con inhabilitación para ejercer los cargos públicos que tenga entre sus funciones el manejo de bienes y fondos del Estado.

Esta situación si está contenida en el marco legal penal, pero como se explicó anteriormente, existen dos tipos de responsabilidades una de naturaleza administrativa y otra penal, en donde el principio de cosa juzgada no es aplicable entre una jurisdicción y otra, ya que la ley 67 de 2008, que crea la Jurisdicción de Cuentas establece con claridad la no prejudicialidad entre el proceso penal y el proceso de cuentas.

Por consiguiente, existe el riesgo que estas personas se incorporen nuevamente en una institución distinta a la que se dio el caso. Situación que mejoraría si el Tribunal de Cuentas, enviara a la Contraloría General de la República copia de la Resolución de Cargos que declara responsable patrimonialmente a las personas para que inhabilite los nombramientos como empleado de manejo, no obstante, falta incluir esto a la Ley 67 de 2008.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Leyes y Documentos Legales

- Constitución Política de la República de Panamá. Reformada por los Actos Reformativos de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativo No. 1 y No. 2 de 1994 y el Acto Legislativo No. 1 de 2004.
- Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
- Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República.
- Ley 81 de 22 de octubre de 2013. Que modifica la Ley 67 de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y dicta otras disposiciones.
- Ley 38 de 31 de julio de 2000. Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y que regulan el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales. Procuraduría de la Administración, Ministerio Público, República de Panamá.
- Código Fiscal de la República de Panamá. Ley 8 de 27 de enero de 1956. Publicado en la Gaceta Oficial 12995 de 29 de junio de 1956.
- Decreto 36 de 10 de febrero de 1990. Por el cual se crea dentro de la Contraloría General de la República la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento. Concordancias, notas, comentarios, normas complementarias y jurisprudencia. 5ª edición, Contraloría General de la República.
- Decreto 65 de 23 de marzo de 1990. Por el cual se crea el Reglamento de Determinación de Responsabilidades. Concordancias, notas, comentarios, normas complementarias y jurisprudencia. 5ª edición, Contraloría General de la República.
- Decreto 106 de 5 de mayo de 1998. Por el cual se crean las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.
- Normas Generales de Administración Presupuestaria. Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. 2019.
- Guía para las Normas de Control Interno del sector público de la INTOSAI, AÑO 2004.

### Libros

- Memoria del Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas. Eficiencia, Probidad, Transparencia, Independencia e Imparcialidad. 2014. Panamá.
- Spencer, A. (2016). Rendición de Cuentas: un modelo de gestión pública participativa. Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteozoro. Panamá.
- Turner, I. (2010). El Tribunal de Cuentas de Panamá. Tribunal de Cuentas en Panamá.

- Vargas Velarde, O. (2005). Los Principios de la Nueva Jurisdicción de Cuentas en Panamá. Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Contraloría General de la República, Panamá.
- Vargas Velarde, O. (2013). Enfoques sobre la Jurisdicción de Cuentas en Panamá. Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Contraloría General de la República, Panamá.
- Vargas Velarde, O. (2014). El Tribunal De Cuentas en Panamá, Tribunal de Cuentas de Panamá.

### **Revistas**

- Carrillo, D. (2020). Efectos jurídicos de la enmienda constitucional en la predeterminación de responsabilidades establecidas por la Contraloría General del Estado como producto de las acciones de control. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. <http://hdl.handle.net/10644/7574>
- Gamboa, J., Puente, S. y Vera, P. (2016). Importancia del Control Interno en el Sector Público. Revista Publicando, 3(8), 1-17. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833405>
- Livo, Y. (2017). Evaluación del cumplimiento de las Normas de Control Interno en las Instituciones Públicas de la Provincia de El Oro, Universidad Técnica de Machala, Ecuador. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/11786/1/TTUACE-2017-CA-CD00150.pdf><https://revistas.upb.edu.co/index.php/RICE/article/view/4512>

## CORREOS HUMANOS: VÍCTIMAS O PARTÍCIPES



**Leidy Esmeralda Herrera Jara\***  
Universidad UMECIT, Panamá  
leidyherrera@umecit.edu.pa

**DOI:** 10.37594/cathedra.n15.470

Fecha de recepción: 12/03/2021

Fecha de revisión: 15/03/2021

Fecha de aceptación: 21/04/2021

### RESUMEN

La temática “correos humanos” tiene como objetivo principal determinar la decisión socioeconómica y demás aspectos generales que facilitan o permiten la implementación con mayor frecuencia del uso de correos humanos para actividades ilícitas, así mismo, la repercusión que esto genera en la sociedad. De igual manera, permitirá que las Instituciones encargadas en el control contribuyan de manera directa a erradicar este fenómeno que se viene presentando dentro de la sociedad, sin distinción de clases sociales y tomando como punto débil las comunidades de escasos recursos. La suma de estos factores hace que las organizaciones criminales desarrollen los máximos esfuerzos para sacar adelante este nefasto negocio y apelar a distintas tácticas para intentar eludir los controles. Debido al aumento de personas capturadas como correos humanos, se prenden las alarmas en las autoridades, por lo que las obliga a crear e implementar estrategias o políticas que contribuyan a la disminución de este flagelo, dado que se considera según estadísticas, que, por cada mula capturada, dos logran su objetivo. Pero lo más importante no es la captura, debido a que estas personas no forman parte de la organización criminal por lo que no se está erradicando el narcotráfico, sino que son personas ajenas a los eslabones que la conforman. Finalmente, el problema radica en establecer, si las personas que son utilizadas como correos humanos son víctimas, partícipes o inocentes.

**Palabras clave:** formas delictivas, control social, víctima, tendencias del delito, formas delictivas.

### HUMAN EMAILS: VICTIMS OR PARTIES

#### ABSTRACT

The main objective of the theme “human emails” is to determine the socioeconomic decision and other general aspects that facilitate or allow the implementation with greater frequency of the

---

\* PhD en Educación. Docente Pregrado y Postgrado, Universidad UMECIT, Panamá

use of human emails for illicit activities, likewise, the repercussion that this generates in society. In the same way, it will allow the Institutions in charge of control to contribute directly to eradicating this phenomenon that has been occurring within society, without distinction of social classes and taking low-income communities as a weak point. The sum of these factors makes the criminal organizations develop the maximum efforts to carry out this nefarious business and resort to different tactics to try to evade the controls. Due to the increase in people captured as human couriers, alarms go off in the authorities, forcing them to create and implement strategies or policies that contribute to the reduction of this scourge, since it is considered according to statistics that, for each mule captured, two achieve their objective. But the most important thing is not the capture, because these people are not part of the criminal organization, so drug trafficking is not being eradicated, but they are people outside the links that make it up. Finally, the problem lies in establishing whether the people who are used as human couriers are victims, participants or innocent.

**Keywords:** criminal forms, social control, victim, crime trends, criminal forms.

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la globalización ha conllevado a que la delincuencia organizada desde los diferentes ámbitos (social, cultural, político, geográfico y económico), adopte nuevas estrategias para evadir el control de la autoridad, utilizando a terceras personas como instrumento facilitador para la materialización de los diferentes delitos.

Uno de los desafíos a contrarrestar es el comercio de personas o correos humanos de forma ilegal con propósitos de esclavitud laboral y explotación, convirtiéndose en un delito de lesa humanidad que viola los derechos humanos, siendo un fenómeno global que afecta en gran parte a menores de edad y mujeres; cuyos elementos se asocian a los medios (amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño, situación de vulnerabilidad, situación económica de la víctima) y al objetivo según al orden de acontecimientos (reclutamiento, transporte, explotación).

La figura del correo humano busca a hombres y mujeres en su mayoría de zonas rurales y parte del nivel urbano por su estrato socioeconómico (bajo y medio), por edades y sexo donde los jóvenes son más ligados, quizás por sus características que reducen la propensión de riesgos, aunado a su nivel de educación media o iniciando la profesional; los motivos que inciden a tomar estas decisiones pueden ser reales o de disculpa manifestando factor económico – necesidad familiar, social o cultural y otros por gusto o codicia. (Gobernación de Risaralda – programa de las Naciones Unidas para la fiscalización Internacional de drogas, 2002).

De lo anterior se puede afirmar que:

Existen más de 500 rutas internacionales para realizar la actividad ilegal de correos humanos, moviendo más de 700 mil personas al año, generando ingresos aproximados de 32.000 mil millones de dólares, siendo este el tercer delito más lucrativo del mundo después del narcotráfico y tráfico ilegal de armas.

En Colombia el posconflicto, la situación actual de Venezuela y la problemática del país ha llevado que los correos humanos se incrementen, evidenciando en el último año 50 personas fueron utilizadas en esta modalidad, de las cuales 42 fueron mujeres y 8 hombres.

Otras finalidades para la utilización de los correos humanos son: narcotráfico, matrimonio servil, trabajos forzados, explotación sexual, esclavitud, mendicidad ajena, servidumbre, tráfico de órganos y armas de fuego. (El Tiempo, 2018)

En este contexto, el narcotráfico se constituye en uno de los principales flagelos donde la necesidad de las personas, el engaño, manipulación y astucia, ha conllevado para que algunos ciudadanos sean cargados o puestos como delincuentes que llevan droga pero que NO son los protagonistas de los ilícitos, sino las víctimas de un montaje siniestro y vil, donde les colocan la droga o les realizan el “cambiao” para luego ser conducidos como los peores delincuentes que existen en la sociedad... Son seres humanos, hombres y mujeres que están privados y privadas de la libertad, purgando penas de prisión, que van desde los cuarenta y ocho meses hasta los doscientos cincuenta meses de prisión (Quiceno, Marulanda, Gómez Gómez, Galán Hernández, & Mendoza, 2004).

Colombia tiene una amplia extensión de frontera limitando con 5 naciones, registrando en muchos segmentos de límite, dificultad para ejercer el control migratorio por parte de las diferentes autoridades, escenario por el cual las organizaciones dedicadas a utilizar correos humanos identifican, estudian, y perfilan las diferentes rutas, siendo de preferencia en las que hay menor control por parte del Estado (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2002).

La familia ligada a “lo económico”, es una de las razones que dispone a los individuos a actuar como correos humanos. Sin embargo, las relaciones y estructura familiares en las que se encuentran inmersos los individuos antes de decidir ser “mulas”, no inciden en su acción, es decir, nadie se va “cargado” para el extranjero porque los padres se separaron o porque el papá abandonó a los(as) hijas(as), no se presentan como motivo de esta conducta, ¡no! Pero sí como consecuencia

de la detención y posterior estadía en prisión, resultado de la “caída”. La responsabilidad social de la conducta “correo humano”, no debe recaer en su dinámica familiar, pues así ha sucedido cuando se han buscado responsables de “males” como el consumo de drogas, la delincuencia, la prostitución. Se presenta, en la conducta estudiada, una realidad que sobrepasa los límites de los aspectos familiares. (Ochoa W. M., 2002).

## **DESARROLLO**

Los correos humanos fueron la primera forma de enviar mensajes verbales, escritos y paquetes a grandes distancias. Nuestros indígenas lo usaron. Los correos chibchas llamados tiuquines eran los hombres más fuertes y atléticos de la comunidad.

Se puede entender por correo a un sistema que permite la comunicación entre dos partes diferentes a través de elementos concretos, generalmente cartas; a través del tiempo ha sido un mecanismo de comunicación muy efectivo que logra acercar a las personas y difundir información, el cual ha evolucionado constantemente haciendo más eficiente este medio de comunicación.

Los correos humanos se han convertido en uno de los principales métodos utilizados por los delincuentes para el tráfico de sustancias ilícitas, mediante esta modalidad utilizan a personas generalmente voluntarias, las cuales reciben un incentivo económico al realizar con éxito la tarea asignada, también por engaño, incluso algunos son presionados para realizar esta actividad, por medio de amenazas a sus familias, los cuales terminan cediendo ante las peticiones de sus victimarios.

Por víctima se entiende toda personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder, por otro lado el victimario es aquel que lleva a cabo una agresión contra alguien, que se convierte en víctima, puede tratarse de un solo individuo o un grupo, generalmente actúa consiente de su accionar y de las consecuencias que esta conlleva.

Existen varias modalidades para transportar las sustancias y pasar desapercibidos ante los controles de las autoridades aeroportuarias, la modalidad más utilizada es ingerir la droga, aquí la persona toma capsulas llenas de la sustancia y la transportan dentro de su cuerpo, esto implica un gran riesgo para el individuo ya que alguna de estas cápsulas puede abrirse en su organismo y ocasionar serias consecuencias incluso la muerte.

De igual forma, se puede transportar introduciéndola en los orificios naturales del cuerpo, generalmente utilizan mujeres en esta modalidad, las cuales acceden más fácilmente a este método ya que no implica tanto riesgo como el método mencionado con anterioridad.

Otra de las modalidades más comunes y utilizadas para el transporte de estas sustancias es llevarla adherida al cuerpo, mediante este método se transporta una mayor cantidad de mercancía, aunque tienen mayor probabilidad de ser descubiertos.

Por último encontramos el método del engaño, mediante este el delincuente utiliza a personas que con anterioridad ha seleccionado y ha logrado un acercamiento para ganarse su confianza, conociendo que va a realizar un viaje a otro país, el victimario le pide que le lleve alguna prenda de vestir o algún tipo de detalle, manifestando que en el lugar de destino lo reclamara un familiar cercano, la víctima desconoce que dentro de este paquete va camuflada mercancía ilícita, y sin tener conocimiento se vuelve partícipe de un delito y si es descubierta tendría consecuencias penales.

El tráfico fabricación o porte de estupefacientes comúnmente denominado narcotráfico, es una conducta punible consagrada en el artículo 376 del código penal de Colombia, el cual reza lo siguiente.

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

No existe algún perfil específico para realizar esta actividad, ya que prácticamente cualquier persona puede llevar a cabo la tarea, en este sentido los delincuentes cambian constantemente el perfil de las personas seleccionadas para tratar de confundir a las autoridades, no obstante muchas de las personas que participan en esta actividad son descubiertas, y llevadas ante la autoridad competente, pese a los rigurosos controles de las autoridades para combatir esta modalidad, resulta en ocasiones ineficiente el sistema, ya que por cada uno descubierto son muchos más los que logran pasar los controles.







Según los cálculos estadísticos realizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho plasmados en el Reporte de Drogas de Colombia 2016, en las cárceles colombianas, en abril de 2016 había 24.897 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las cuales el 84.4% eran hombres (21.008) y el 15.6% eran mujeres (3.889).

El total de capturas realizadas en aeropuertos por la Dirección de Antinarcóticos por tráfico de estupefacientes en el periodo 2014-2016 fueron 1.254 de las cuales 328 (25%) fueron mujeres y 926 (75%) hombres.



Fuente Gráfico 1: CIENA-DIRAN Colombia

**Fuente:** <https://www.policia.gov.co/file/99013/download?token=fF-0MwFC>

## TIPOS DE PORTADORES HUMANOS DE DROGAS

**Body packers.** Son traficantes de droga que tienen como objetivo transportar la droga ilegal de unos distribuidores a otros. Para ello ingieren grandes cantidades de droga envasada en bolsas recubiertas por envoltorios de látex con el fin de evitar su ruptura dentro del tracto gastrointestinal. El número de bolsas puede variar entre 10 y 100, lo que supone un riesgo para la persona que lo transporta.

**Body stuffers.** Son personas que se tragan pequeñas cantidades de droga cuando se ven a punto de ser detenidos por la policía. Normalmente se trata de droga para el consumo propio, de ahí que las cantidades sean notablemente inferiores a las ingeridas por los body packers. Además, el envoltorio que contiene la droga puede no ser adecuado para su posterior digestión, por lo que podría derivar en una importante intoxicación.

Según la reforma legislativa en materia de drogas No. 20 por Gloria Lai. Junio de 2012. Desde los años noventa, instituciones como el Grupo Pompidou del Consejo de Europa, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y el Consejo sobre imposición de penas del

Reino Unido han puesto en marcha iniciativas con el objetivo de desarrollar normas para imponer penas proporcionadas a los correos o ‘mulas’ de drogas. Portugal, por ejemplo, ofrece un buen ejemplo de cómo establecer una distinción entre mulas y traficantes de drogas.

La definición de ‘mula de drogas’ varía según las jurisdicciones. Un estudio elaborado recientemente en Quito, Ecuador, propone que se defina como “una persona que transporta a través de fronteras internacionales drogas pagadas por otra persona. La persona puede ser remunerada o no (...) la cantidad de drogas que se transporta depende siempre de la decisión de quien paga”.

El estudio plantea también otras diferenciaciones, según si la ‘mula’ es experimentada y si las drogas se transportan dentro del propio cuerpo, sujetas a este o a la ropa, o bien en el equipaje (en este último caso, hay menos probabilidades de que la persona sepa qué está transportando).

Entre las ‘mulas’ se puede distinguir también a los ‘traficantes profesionales’, que “transportan drogas por las que han pagado”, que están “dispuestos a asumir el riesgo de ir a prisión” y que “prefieren transportar pequeñas cantidades que consideran que supondrán penas menores”.

En el contexto de las conclusiones del estudio, no parece de utilidad contrastar el papel desempeñado por la persona con la cantidad de drogas transportada a la hora de imponer la pena, ya que las ‘mulas’ que llevan grandes cantidades se ven obligadas a hacerlo por terceras personas y carecen de control sobre el tipo de droga que transportan, lo cual sigue reflejando un bajo nivel de culpabilidad.

## **ASÍ ES COMO RECLUTAN LOS CORREOS HUMANOS QUE CAEN CON DROGA EN CHINA.**

La modalidad más utilizada para el envío de droga a China no son las ‘mulas’ o correos humanos, como los casos de Reinaldo, Lady y Francisco, las bandas le están apostando a las encomiendas.

Las redes, según información de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dirán), envían por correo certificado pequeñas cantidades que oscilan entre 10 y 200 gramos.

La segunda modalidad son los correos humanos con la droga adherida, ingerida o en equipaje de doble fondo (de mano o bodega).

Fuentes del organismo de seguridad explican que las bandas criminales buscan la captación

de personas en zonas marginales de Antioquia, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Risaralda y Valle.



Una vez son reclutadas las personas, estas son trasladadas hasta ciudades donde se ubican los aeropuertos de operación o conexión internacional como Bogotá, Rionegro, Palmira, Armenia, Cúcuta y Bucaramanga.

El perfil que las redes están buscando son personas con muchos problemas económicos o bajos niveles de ingresos; con enfermedades terminales como VIH o cáncer; extranjeros, dependiendo el destino final de la droga (hacia Norteamérica, mexicanos, y hacia Europa, españoles); también ciudadanos en condiciones de migración irregular.

Durante las investigaciones, la Dirección de Antinarcóticos ha establecido que las redes ofrecen entre US\$3000 y US\$5000 a cada persona por el viaje, facilitando hasta el 75 % del pago con el fin de comprometer su voluntad de cumplir el trabajo.

Al salir del país, el pasante hace escalas en países de Europa y Oriente Medio que cuenten con poco control de antinarcóticos, hasta alcanzar su destino final en Asia.

Una o dos noches antes del viaje, en una vivienda u hotel, el arriero o preparador hace la entrega del dinero, los tiquetes y el celular, aquellos que transportan la droga en el organismo son preparados un día antes, haciendo ensayos con ingesta de uvas chilenas para luego ser ‘cargados’ en la madrugada.

Las personas que transportan la droga en equipajes u otros elementos con doble fondo son llevados a sitios cercanos al aeropuerto para hacerle la entrega. También usan las terminales. (BARRERO, 2017)

### **DELITO DE NARCOTRÁFICO:**

#### **Marco Legal Colombiano:**

Artículo 376 del Código Penal Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que a la letra reza lo siguiente:

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho, según sus competencias”.

Se trata de un delito que de tiempo atrás afecta a todo el mundo, especialmente a nuestro país, razón por la cual las penas han sido objeto de modificación en reiteradas ocasiones con el fin de combatir fuertemente este tipo de comportamientos que afectan no sólo a un bien jurídico tutelado, sino a varios, por lo que se ha denominado por la jurisprudencia como pluriofensivo.

**Tabla No 1.** Marco legal de la Organización De Las Naciones Unidad ONU

Fecha y lugar de la firma	Título	Entrada en vigor
Enero 1912, La Haya, Países Bajos	Convención Internacional del Opio	Junio 1919
Febrero 1925, Ginebra, Suiza	Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado	Julio 1926
Febrero 1925, Ginebra, Suiza		Septiembre 1928
Julio 1931, Ginebra, Suiza	Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes	Julio 1933
Noviembre 1931, Bangkok, Tailandia	Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente	Abril 1937
Junio 1936, Ginebra, Suiza	Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas	Octubre 1939
Diciembre 1946, Nueva York, Estados Unidos	Protocolo de Lake Success – Protocolo que modifica los acuerdos, convenciones y protocolos sobre estupefacientes concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero y el 19 de febrero de 1925, y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936	1948
Noviembre 1948, París, Francia	Protocolo de París – Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención del 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946	Diciembre 1949
Junio 1953, Nueva York, Estados Unidos	Protocolo del Opio de Nueva York – Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio	Marzo 1963

**Fuente:** <http://www.un.org/es/sections/what-we-do/uphold-international-law/>

## **LAS CONVENCIONES DE DROGAS DE LA ONU:**

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Convenio Internacional del Opio de La Haya (1912).

Convención Internacional sobre el Opio de 1925

UNGASS 2016: perspectivas para la reforma de los tratados y la coherencia de todo el sistema de la ONU en materia de políticas de drogas, mayo de 2015

IDPC response to the 2012 Annual Report of the International Narcotics Control Board, Agosto de 2013

E/CN.7/590. Comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

## **DELITO DE TRATA DE PERSONAS**

**Marco Legal Colombiano: Proyecto De Ley 173 De 2001 Cámara.**

**Artículo 1º.** Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana.?

(La subraya es mía).

**Artículo 17.** Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. (Muy sabiamente el Constituyente no se limitó a la prohibición de la comúnmente denominada Trata de Blancas (tráfico de mujeres con fines de explotación sexual), sino que, advirtiendo posibles conductas delictivas, fue más allá, prohibiendo tajantemente la Trata de seres humanos en todas sus formas.

**Artículo 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.

**Artículo 44.** Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.



### **NUEVAS LEYES INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS:**

- A. El Congreso de Estados Unidos aprobó por unanimidad 371 votos contra 1, una nueva legislación mucho más agresiva, que ofrece herramientas para perseguir a los traficantes de personas y a los gobiernos que le permitan operar en la impunidad. Vale la pena destacar que esta ley dentro de sus herramientas estableció un requisito para negar algunas formas de asistencia norteamericana a los países que no hagan esfuerzos para solucionar este problema. Es decir, el mecanismo de certificación que otorga o no Estados Unidos, dependiendo de los esfuerzos efectuados por otro Estado en materia de Narcotráfico, Derechos Humanos, se extiende ahora a la Trata de Personas. (Boletín de prensa, Gail Rusell Chaddock, Washington D.C.)
- B. La Unión Europea armonizará las penas contra la Trata de Personas y la Pornografía Infantil. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea acordaron recientemente en Estocolmo adoptar urgentemente un marco legal común que permita armonizar la definición y las penas para el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y económica.

Igualmente, el Gobierno Español adaptará la legislación española a las futuras directrices de la Unión Europea modificando el Código Penal para endurecer el castigo de estos delitos, así lo anunció el ministro de Justicia Español Ángel Acebes. (Diario El País Digital, 10 de febrero de 2001 No. 1744, Sandro Pozzi, Madrid).

- C. El Estatuto Penal Internacional, adoptado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998 en Roma, catalogó la esclavitud y la prostitución forzada como delitos de Lesa Humanidad, cuando estos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Definió esclavitud como el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. (Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional).

Honorables Congresistas, en sus manos dejo esta importante iniciativa legislativa, que busca desarrollar estrategias para lograr una lucha más eficaz contra un delito penalizado internacionalmente que viola los derechos humanos, la cual sé que redundará en beneficio de la libertad y dignidad humana a que todos los colombianos tenemos derecho a disfrutar.

## **LAVADO DE ACTIVOS**

### **Marco Legal Colombiano**

LEY 599 DE 2000 (julio 24) por la cual se expide el Código Penal.

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiriera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeran mercancías al territorio nacional. El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeran mercancías de contrabando al territorio nacional.

### **Marco Legal Internacional**

Convención de Viena (1988)

- Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
- Convención de Palermo (2000)
- Convención de Mérida (2003)

A través de estos instrumentos los Estados se comprometieron a perseguir los delitos y las ganancias derivadas de los mismos. Pero la preocupación de la comunidad internacional no sólo se enfocó en la persecución del crimen como forma de combatir esa delincuencia nacional y transnacional, también se crearon recomendaciones específicas para constituir los sistemas antilavado internacionales, emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – GAFI.



## Georeferenciación

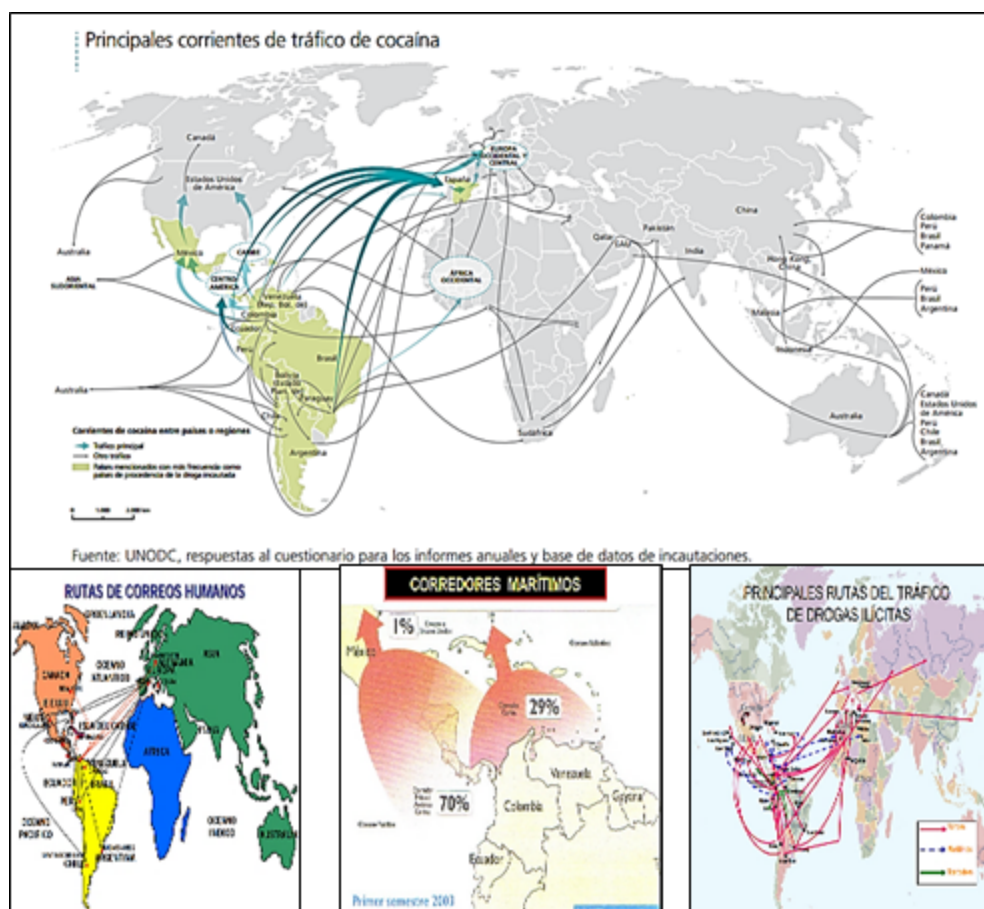
En el mundo son cada vez más constante los casos de correos humanos, a diario en los principales aeropuertos, se presentan diferentes casos de esta magnitud, entre los más destacados son; el tráfico de cocaína, y drogas sintéticas.

Los países como México, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia y Brasil son los principales corredores y exponentes de este tipo de modalidad delictiva, con destino a los Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, Italia, España, Francia.

A continuación, la georeferenciación mundial rutas, y países donde se ve este flagelo:

### Correos humanos en el mundo.

Personas que transportan drogas ilícitas a cambio de una retribución económica, bajo presión o por ignorancia o engaño.<sup>1</sup>



Fuente: <http://bit.ly/2b9t9TV>

<sup>1</sup> <http://bit.ly/2DUd8PR>

### **Mecanismos de tráfico por pasantes (mulas)**

- Corporal
- Ingerida
- Adherida al cuerpo
- Introducida: Orificios naturales
- Cirugía
- Camuflada en prendas de vestir
- Camuflada en su equipaje

### **Otras características a tener en cuenta:**

- Dificultad al hablar (Tartamudeo, seguridad)
- Rostro pálido o encendido
- Respuestas incoherentes o planificadas
- Síntomas de cansancio y ojeras
- Empleo de agencias de viajes conocidas

Hasta ahora -afirma un investigador policial-, *“tenemos identificadas 25 rutas del narcotráfico que nacen en Colombia, atraviesan el vecino país y dan a sus costas, de donde sale la cocaína al extranjero. Claro que pueden ser más”*.

Documentos colombianos con el sello de reservado dan cuenta de que algunos de esos caminos (aéreos, terrestres y fluviales) parten desde el sur de Bolívar, el río Meta, Cesar, La Guajira, Saravena y Arauca. Los destinos: el estado Apure, el Estado Zulia, la península de Paraguaná, Caracas e Isla de Margarita.

La permeabilidad de la línea fronteriza, además de las dificultades del terreno y la falta de presencia colombiana en los límites, radica, según investigadores colombianos, en que desde el 2005 se acabó el convenio de interdicción aérea entre Estados Unidos y Venezuela, pero, sobre todo, por la participación en el negocio ilegal de algunos miembros de alto rango de las autoridades venezolanas. (tiempo, s.f.)

Aún más preocupante, en los últimos años han vuelto a aumentar las capturas de quienes arriesgan su salud y su libertad por un fajo de dólares. Según la Policía, este año detuvieron a 367 personas con droga en aeropuertos del país, 10 por ciento más que en 2013, y decomisaron 1,4 toneladas de cocaína. Las autoridades explican que los narcos tienen cada vez más dificultades para sacar grandes cargamentos de droga y volvieron al viejo método del correo humano. La cifra puede

deberse también al aumento de viajes internacionales que vive Colombia. Hoy 12 aeropuertos ofrecen vuelos directos al extranjero y es posible ir a Panamá, Estados Unidos o Aruba desde ciudades intermedias como Cúcuta, Pereira o Riohacha. El sector vive una bonanza sin precedentes y en 2013 la salida de colombianos al exterior aumentó 14 por ciento. Las estadísticas dicen que México y España son los principales destinos de las mulas, que la lista también incluye a Brasil, Panamá, República Dominicana y que Estados Unidos dejó de ser uno de los rumbos predilectos. Que un tercio de las mulas son extranjeras y que las formas más comunes para esconder la droga son el estómago o en maletas de doble fondo. Pero detrás de los números hay dramas, engaños, intimidación y pobreza. Eso cuenta el libro *No seas mula*, recién lanzado, que reúne 36 crónicas reales seleccionadas, escritas y editadas por presos de La Modelo y del Buen Pastor en Bogotá. (Semana, s.f.)

Nueve de cada 10 colombianos detenidos en el exterior están presos por delitos de narcotráfico. El 66% de los reclusos están inculcados por tráfico de cocaína; el 21%, heroína; marihuana, el 6%. El mayor porcentaje en cantidad de droga transportada oscila entre 1.001 y 3.000 gramos.

El 70% de las mulas retenidas se encuentra en cárceles de los Estados Unidos, el 18 por ciento en Venezuela y el 12% en Ecuador.

El 22% tiene bachillerato incompleto; el 18 por ciento, completo; el 16% niveles universitarios incompletos; el 8 %, completo y el 14%, estudios técnicos. El 32% proviene de la zona del eje cafetero, el 20% de Cali y los municipios del Valle, el 20% de los puertos aéreos de Pasto, Cúcuta y Barranquilla, el 18% de otros municipios del país y el 10% de Bogotá y Cundinamarca.

El 29% de las mulas retenidas dijo que fue engañada. El 26% de los detenidos afirmó haber sido contactado por amigos; el 23%, otras formas; el 9% por un desconocido; el 6% al ser obligados y el seis por ciento, ya lo habían hecho.

El 46% de los detenidos encuestados sirvió de mula para obtener dinero; el 16% a fin de vivir más cómodo o mejor; el 8% con el deseo de montar o mejorar su negocio independiente; el 6% para comprar casa y el 6% por ninguna razón.

El pago por viaje oscila entre 1.500 a 3.000 dólares por pasada. Las mulas realizan entre dos o tres viajes en el año y cada operación de ida y regreso dura de dos a tres semanas. El promedio de ingresos anuales es de 6.000 dólares por esta actividad.

Los lugares de destino de las mulas encuestadas: el 52% se dirigía a los Estados Unidos; el 17% a Venezuela; el 10% a Ecuador; el 10% a Europa; el 5% al Caribe; el 4% a otras ciudades y el 2% a Centroamérica. (eltiempo.com, s.f.)

Este médico sostiene que es tan frecuente el uso de ‘correos humanos’ en los aeropuertos internacionales de Cali y Pereira, “que nos vimos obligados a establecer un protocolo para salvar a las personas que eran capturadas”. De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Antinarcóticos a nivel nacional, en lo que va corrido de 2014 se han capturado un total de 107 ‘mulas’ cargadas con droga en los distintos terminales aéreos del país. Llama la atención que el destino de los correos humanos ha cambiado con respecto a los años 80 y 90, cuando predominaban Estado Unidos y Canadá. Ahora el país hacia donde más personas intentan llevar droga es España, seguida por México, Francia, Alemania e Inglaterra, así como República Dominicana, Brasil y Costa Rica, según reportes de la Policía Antinarcóticos.

El mayor general Ricardo Restrepo, director de Antinarcóticos, afirma que “la ruta por España es una de las más usadas, especialmente por extranjeros, debido a la crisis económica en dicho país”. Eso explica el incremento en las acciones represivas de la Policía española, que en alianza con la colombiana ha desmantelado desde 2011 varias redes de narcotraficantes, entre ellas una que usaba bebés para ingresar la droga desde varios países de América Latina, camuflándola en los pañales.

“Aunque en la región este es el primer caso de una menor que es obligada a ingerir cápsulas con droga, en el pasado se conoció el caso de un cartel que enviaba su mercancía usando bebés fallecidos y los hacían volar como si estuvieran vivos”, dice el médico Quiñones, quien agrega que, si la niña en Cali se salva, “será un verdadero milagro”. (elespectador.com, s.f.)

## MÉTODO

La investigación es de tipo cualitativa, con enfoque de un estudio documental descriptivo que permite indagar e interpretar los documentos evidencias de forma integral, extrayendo de ellos las respuestas a las preguntas centrales de la investigación; se basa en técnicas de recolección de información bibliográficas, tiene un diseño no experimental (no hay manipulación de variables), transversal (hay un solo momento de recolección de datos). (Cázares Hernández, 1999). La temática Correos Humanos tiene como objetivo principal determinar la decisión socioeconómica y demás aspectos generales que facilitan o permiten la implementación con mayor frecuencia del uso de correos humanos para actividades ilícitas, así mismo, la repercusión que esto genera en la sociedad.

De igual manera permitirá que las Instituciones encargadas en el control contribuyan de manera directa a erradicar este fenómeno que se viene presentando dentro de la sociedad, sin distinción de clases sociales y tomando como punto débil las comunidades de escasos recursos, y de esta manera desarrollar acciones que permitan mitigar este flagelo.

En tal sentido, el proceso metodológico de análisis documental y recolección de información se desarrolló en tres momentos.

Con el propósito de cumplir los objetivos de esta investigación se inició con el primer momento que corresponde a examinar y documentar las investigaciones adelantadas para ello se utilizó las técnicas de investigación documental que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental que directa o indirectamente aporte información significativa, referencial e importante del fenómeno a estudiar, utilizando para ello, una metódica de fichas bibliográficas para el análisis de leyes y jurisprudencia, la verificación de bases de datos, investigaciones realizadas por funcionarios de Colombia, tesis de grado de maestrías en estudios sociales, entre otras. (Cruz, 2014)

El segundo momento corresponde al diseño e implementación del instrumento con la intención de obtener los datos necesarios para el estudio, para tal caso se planteó como herramienta de recolección de información la encuesta que revela a partir de cierto número de individuos, las relaciones generales entre las características de un gran número de variables, mediante un procedimiento estímulo-respuesta homogéneo, de ahí que la encuesta de diagnóstico se pretende aplicar a 50 de los policiales que se encuentran laborando en los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Armenia para identificar los mecanismos de control o evidenciados para mitigar el fenómeno, este método se preocupa en averiguar cómo contribuye una serie de factores a la determinación de algún fenómeno, factores o causas posibles, dadas en un ámbito relativamente desconocido. (Collazos, 2006).

Finalmente, el tercer momento se centra en plantear acciones de mejora que conlleven a incorporar mecanismos de control asertivo para el servicio de policía frente a las manifestaciones del delito.

## **RESULTADOS**

Se encontró que el género comprometido como correo humano en un 82% es el femenino según la primera pregunta y la edad más frecuente en las mujeres víctimas de la trata de personas está en un rango entre 18 a 25 años; esto se debe a dos factores: en primer lugar, porque ya son

mayores de edad lo que facilita la expedición de documentos como visas y pasaportes para que puedan salir del país y en segundo lugar, porque son jóvenes, bonitas, y más manipulables, tanto en el sentido de engaño para que entren a la red de traficantes, como a las diferentes formas de coacción.

Así mismo, y cotejando la información de las víctimas mujeres con cifras de la Fundación Esperanza (26 %), DAS/INTERPOL (55.5 %) y OIM (29%), se observan coincidencias relacionadas con que la región que más origina víctimas de trata de personas es la zona cafetera, que comprende: Pereira, Manizales y Medellín. De igual forma en la región del Valle del Cauca, ha venido aumentando, pues se presume que las redes de traficantes han establecido fuertes lazos con la población generando confianza y creencia en las empresas fachada con fines a la explotación sexual.

Las rutas o destinos que ocasionalmente utilizan los correos humanos se encuentran España con un 45% México con el 35% y Panamá con el 20%. Es evidente que las ciudades y las características de las zonas como el Eje Cafetero, como el Valle y Antioquia, han sido impactadas por décadas por parte del narcotráfico; no sólo han experimentado altos índices de violencia, sino que también han convivido con valores sociales como el de “hacer dinero fácil al precio que sea” y/o estilos de vidas consumistas.

Por otra parte, la presencia de grupos armados al margen de la ley se ha incrementado en estas tres zonas desde finales de los ochenta, y las consecuencias, en el caso particular de la trata, han sido notorias, entre otras cosas, por la práctica generalizada de reclutamiento a la población adulta, niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos. Pero no se desconoce que otras ciudades del país también sean propensas a sufrir de este delito.<sup>2</sup>

En cuanto a la cantidad de kilogramos que transportan oscila con un 70% 10 kilogramos, y un 30% 5 kilogramos. Es como manifiestan que el estado en que se trafica la cantidad de droga está en un 85% polvo y 15% líquido, en cuanto al tipo de droga se encuentran los porcentajes entre heroína 35%, Cocaína 25%, marihuana 20% y drogas sintéticas 20%.

---

2 En estudios recientes, y aunque en menor medida, la zona sur del país presenta cierta problemática que facilita la aparición del delito de la trata de personas y correos humanos. En primer lugar, la mayoría de los departamentos que la conforman son los más pobres del país. En segundo lugar, la violencia social y política ha marginado esta zona históricamente, lo que quiere decir que el conflicto armado se ha intensificado en esta región tanto con los grupos al margen de la ley como el conflicto binacional con Ecuador. En tercer lugar y consecuencia del conflicto armado el desplazamiento forzado muestra índices elevados de aumento. Y en cuarto lugar, el narcotráfico, la explotación sexual y los trabajos forzados son también características que posibilitan la aparición de este delito en la zona sur del país.



Así mismo cuando se refiere a la modalidad más usada para transportar la droga responden que el 65% son capsulas en el cuerpo y el 35% equipaje de transporte. Cuando se consulta sobre la temporada del año que se presentan más casos, manifiestan que temporada de vacaciones de junio un 35%, temporada vacacional de diciembre 45% fechas especiales 10%, y semana santa 10%.

Continuando con la encuesta cuando se consulta sobre la cantidad de capturas de funcionarios públicos por ser autores materiales e intelectuales en correos humanos el 90% manifiesta que está entre 5-10 y el 10% entre 1-5.

De otra parte, consideran que la cantidad de dinero que ofrecen las organizaciones ilegales a los correos humanos se encuentra entre mayor a 10 millones un 65%, entre 1 y 10 millones un 35%. En cuanto si conocen las condenas definidas para las personas capturadas como correos humanos consideran que privación de la libertad intramural un 80% y privación de la libertad en domicilio 20%.

Paralelo a lo antes descrito es perentorio mencionar que se realizó una encuesta a 20 reclusas en el Centro Penitenciario el Buen Pastor, quienes fueron condenadas por el delito de narcotráfico, dónde se le realizaron preguntas cómo; porqué medio fue contactada manifestando que el 80% fue por conocido, y el 20% por internet, donde le ofrecieron a cambio el 90% dinero y el 10% otro (trabajo), motivaciones para realizar la conducta en un 40% amenazas, un 60% necesidades económicas; al preguntarle cómo se sintió iniciando la práctica el 45% incomoda el 35% nerviosa y el 20% mal; hasta que punto quería llegar con ser correo humano, el 50% Por ensayar, 40% conseguir dinero 10% Narcotraficante; el tipo de sustancia estupefaciente transportada, 40% cocaína, 45% marihuana, 15% heroína; tipo de transporte, por aire el 70%, por agua el 20% y el 10% por tierra; la organización le pide contactar a más personas para que participen como correos humanos el 10% nunca, 30% me obligaron, y el 70% no; alguien más tenía conocimiento de lo que iba a hacer, el 45% mi familia, 20% amigos 35% nadie.

En lo que respecta a los correos humanos y en su mayoría llevados a cabo por el género femenino involucrando las drogas; la delincuencia organizada en la Unión está aumentando y la producción y el tráfico de drogas parecen seguir siendo las principales actividades de las redes delictivas. La continua diversificación y evolución de las rutas de la droga suponen un reto para la labor de las fuerzas de seguridad. Los delincuentes siguen examinando los éxitos logrados y los fracasos sufridos en el tráfico de sus mercancías ilícitas y cambian sus operaciones en consecuencia, empleando rutas alternativas, urdiendo nuevos métodos de ocultación o reclutando nuevos correos.

## DISCUSIÓN DE RESULTADOS

No es ajena a la condición de víctima de trata de personas, el nivel educativo. Éste en las mujeres del estudio muestra que sus niveles de estudio no sobrepasan la secundaria completa. Pero en la actualidad y por la dinámica globalizante que ha mostrado el delito, no necesariamente las víctimas, son personas que carecen de educación. Según datos de Fundación Esperanza, muchas de las víctimas de trata de personas son de estratos socioeconómicos altos con niveles educativos superiores a los de la población en general, lo único que cambia es que se van bajo el supuesto de fuga de cerebros; universitarias que son contactadas a través de oficinas para realizar pasantías o trabajos en supuestas multinacionales, pero que, en el momento de ser sacadas del país, sus condiciones cambian para la explotación.

Ahora bien, según la Fundación Esperanza (Colombia, 2000), las víctimas antes de viajar desarrollaban labores, domesticas, de peluquería, vendedoras o desempleadas; con bajo nivel educativo, pues frecuentemente, la falta de oportunidades para acceder a una buena educación o simplemente acceder al sistema educativo, se reconoce como una de las principales causas de la trata de personas; esto se evidencia en la medida en que la situación social de las mujeres recae en la mayoría de veces en el cuidado de los hijos y las labores domésticas y que de ellas dependen sus hijos económicamente.

Una vez analizada la información recolectada mediante los diferentes medios, podemos concluir que, en las últimas 3 décadas, en Colombia las modalidades y rutas utilizadas por las bandas criminales dedicadas al Narcotráfico, han tenido una evolución significativa, en respuesta de los esfuerzos y controles realizados por las autoridades con el fin de contrarrestar este flagelo. Dentro de la modalidad de correos humanos, estas bandas delincuenciales han modificado los perfiles de las personas encargadas de realizar esta labor tan riesgosa; con el fin de despistar a las autoridades. Las rutas también han variado considerablemente ya que la demanda ha aumentado en muchos mercados que anteriormente no se tenía influencia de estas sustancias ilícitas; también se han visto variadas por los estrictos controles de las autoridades, que han obligado a estos grupos de hacer escalas a sitios poco transitados y pasar desapercibidos, realizando mutación transnacional, obligando a las autoridades a ser más competentes en cuanto a este tipo de modalidades.

Es necesario mencionar que durante muchos años la lucha contra el narcotráfico ha dejado un sin número de pérdidas humanas y económicas, debido a la situación económica del país, por el desempleo o por la sencilla razón de obtener dinero rápido, se convierten en “correos humanos” o las famosas mulas, para transportar drogas a diferentes países del mundo; el esfuerzo de las autoridades ha incrementado en las fronteras, aeropuertos y distintos medios de transporte, y, a



pesar de ello, se ha aumentado considerablemente este flagelo, puesto que a los narcotraficantes se les dificulta enviar grandes cargamentos solos, obligando a estos a usar la condición humana para el transporte.

El problema de los “correos humanos” no solo se debe a la simple necesidad de tener algún ingreso por parte de las personas que se deciden a realizar esta conducta, si miramos más a fondo esta problemática, podremos analizar a simple vista que un sin número de personas se someten a ella por la falta de oportunidades en cuanto a obtener ingresos básicos para el sustento de sus familias o en algunos casos personales; la falta de oportunidades y de igualdad por parte del Estado y el abandono del mismo, donde no se tiene una real educación sobre este flagelo ni tampoco políticas concretas que luchen contra éste.

Por último, basándonos en estadísticas reales, es necesario manifestar que el incremento de cocaína a nivel nacional se ha incrementado considerablemente y el gobierno nacional no ha tomado las respectivas cartas en el asunto, en donde se han incrementado los grupos delincuenciales que la producen y la exportan, mostrando con ello la causa y efecto de este gran problema. Por eso, si no se ataca de manera eficaz y contundente la raíz del problema, en este caso atacar de manera contundente y radical a los grupos narcoterroristas y mejorando la calidad de vida de las personas que se ven obligadas a realizar estos actos por solamente por necesidad, habrá personas que estarán dispuestas a arriesgar su vida con el fin de obtener otros ingresos.

## CONCLUSIONES

Comprender el fenómeno de la trata de personas implica un estudio multidisciplinario en el que se identifiquen los elementos generales y particulares que le subyacen, esto es, su dimensión macrosocial en cuanto al contexto político, geográfico, ideológico y económico se refiere, sin desconocer las motivaciones, situaciones y condiciones que atraviesan a victimarios (tratantes) y a víctimas, y los factores que les conducen a ocupar uno u otro rol.

Varias organizaciones delincuenciales usan “correos humanos” para reducir el riesgo de ser capturados ellos mismo, y así a su vez obtener el mayor beneficio económico, ya que quien presta su cuerpo para transportar “la droga” recibe un pago el cual es poco, comparado con el valor de la mercancía traficada. Pero para alguien de bajos recursos aparente ser mucho dinero, haciéndolo parecer una forma fácil de hacer mucho dinero con poco esfuerzo.

Respecto a correos humanos o mal llamados “mulas” se puede concluir que el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes no es tan solo un delito, sino que además es considerado un

medio para la obtención de lucro económico a nivel mundial, quizá uno de los más importantes y de mayor atención para las autoridades competentes y a pesar de tantos esfuerzos y trabajos mancomunados entre naciones por acabar con este flagelo nunca es suficiente porque las modalidades del delito son cambiantes entre ellas se encuentra la de correos humanos que a través del tiempo ha ocupado un lugar muy importante dentro de esta actividad económica ilegal.

Es por ello, que cada vez que las autoridades descubren un método de la utilización de correos humanos la delincuencia lleva muy desarrollado un método innovador en otras palabras la mutación del delito va un paso adelante y en mayor relevancia si se trata de narcotráfico por tanto, es una actividad que seguirá viéndose a futuro si realmente no se implementa por ejemplo el uso de tecnología en todos los lugares expuestos a ese flagelo, capaces de controlar el público que los frecuenta a nivel general con capacidad de reacción judicial para la totalidad de los casos que se puedan presentar y por otro lado sería muy efectivo que todas las naciones se unieran para legislar y crear penas lo suficientemente severas como la pena de muerte lo cual infunde respeto al ciudadano para la no comisión de este tipo de actividades delictivas.

Los beneficios que podríamos obtener mediante este proyecto sería que saldríamos de la ignorancia por que la investigación nos dará mayor conocimiento y entendimiento acerca de cómo surge, se desarrolla y las consecuencias que tiene el problema de la utilización de correos humanos, víctimas y partícipes.

Reformar las leyes de drogas para distinguir entre delitos de drogas de menor, media y alta escala, entre niveles de liderazgo en las redes criminales, entre delitos violentos y no violentos, así como por tipos de drogas.

Promover procesos de integración social –incluyendo programas de estudio, capacitación técnica o trabajo- como alternativas al encarcelamiento, así como dentro de la cárcel y fuera de ella.

### **SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES**

Como respuesta a este flagelo, las instituciones deben realizar un trabajo coordinado logrando la captura y judicialización de las cabezas de estas organizaciones, mitigando esta modalidad de delito. En la rama legislativa y judicial se deben aunar esfuerzos para trabajar en la desestimulación de esta conducta.

El delito muta y las organizaciones delincuenciales han sobrepasado los límites hasta llegar a amenazar de muerte, secuestro o amenazas a las familias de las mal llamadas mulas; en este sentido

la policía y la fiscalía, debe realizar un trabajo integral que permita desarticular toda el hampa. Nos hace falta desarrollar una política que minimice el consumo en los colegios, sensibilizando a las personas sobre el mundo de las drogas, y los problemas jurídicos y sociales que genera. Las diferentes autoridades político-administrativas, deben propender por realizar campañas de sensibilización en todos los niveles sociales, encaminados a educar las personas acerca de esta dura problemática, mostrando las diferentes modalidades utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para embaucar e involucrar los incautos en estas malas prácticas. Así mismo, con diferentes ejemplos gráficos, videos y obras teatrales, dar a conocer las duras consecuencias que pueden tener quienes sean capturados por este delito y, pero aun la mortandad causada por esta modalidad, cuando las capsulas de droga estalla es su organismo. También deben auspiciarse cuñas publicitarias a través de los medios de comunicación, redes sociales, para concientizar a las personas del grave error que se puede cometer.

Esta problemática, de carácter mundial, constituye sin duda alguna la violación de un conjunto de derechos humanos que debería obligar a una agenda urgente y unificada en cuanto a marcos jurídicos, instancias de investigación y prevención se refiere.

Se sugiere que sea el enfoque ecológico, el marco bajo el cual se analicen estos factores de riesgo, entendiendo que este enfoque ayuda a identificar las raíces de los fenómenos que impiden, retardan o favorecen la ocurrencia de diferentes delitos y en particular el de correos humanos.

En este sentido, permite construir referentes conceptuales para comprender las dinámicas de los conflictos familiares y comunitarios, como parte estructural de la violencia social que se vive día a día en los distintos territorios sociales. De esta manera se generan líneas de acción coherentes, en los ámbitos de política pública, que posibilitan crear condiciones para una convivencia sana, pacífica, diversa y tolerante.

El modelo ecológico es utilizado y recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, destacando que “su principal utilidad estriba en que ayuda a distinguir entre los innumerables factores que influyen en la violencia, al tiempo que proporciona un marco para comprender como interactúan” (OPS-OMS, 2002 Pág. 11).

Dicho enfoque consta de cuatro niveles de análisis: I. El nivel individual que pretende identificar los factores biológicos, psicológicos y de la historia personal. II. El nivel relacional indaga el modo en que las relaciones interpersonales cercanas con la familia, la pareja y los amigos-as, aumentan el riesgo de convertirse en víctima de actos violentos. III.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2011). Ley 1448 de 2011 Nivel Nacional. Obtenido de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043>
- BARRERO, A. F. (13 de 08 de 2017). ASI ES COMO RECLUTAN LOS CORREOS HUMANOS QUE CAEN EN CHINA. EL PAIS.COM.CO, págs. <http://m.elpais.com.co/judicial/exclusivo-asi-es-como-reclutan-los-correos-humanos-que-caen-con-droga-en-china.html>.
- Collazos, M. (2006). [www.marisolcollazos.es](http://www.marisolcollazos.es). Obtenido de [www.marisolcollazos.es](http://www.marisolcollazos.es): <http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victimologia-Concepto-de-victima.html>
- Colombia, T. d. (2000). “Primer Encuentro Nacional sobre Tráfico de Personas en Colombia” 15,16, y 17 de noviembr. Bogotá, Colombia Pp.35.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (22 de Noviembre de 2002). <https://www.cepal.org>. Obtenido de Comisión Económica para América Latina y el Caribe: <https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf>
- El Tiempo. (25 de 01 de 2018). El 84% de las víctimas por trata de personas son mujeres. El Tiempo.
- [elespectador.com](http://elespectador.com). (s.f.). Obtenido de <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mulas-un-delito-no-da-tregua-articulo-528487>
- [eltiempo.com](http://eltiempo.com). (s.f.). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-494603>
- Ilanud. (1988). Tesauro de política criminal latinoamericana. San Jose, Costa Rica.
- Ochoa, W. M. (06 de 2002). <https://www.google.com.co/search?ei=>. Obtenido de [www.mamacoca.org/docs\\_de\\_base/Cifras.../Las\\_mulas\\_del\\_eje\\_cafetero\\_](http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras.../Las_mulas_del_eje_cafetero_)
- Ochoa, W. M. (06 de 2002). [mamacoca](http://www.mamacoca.org). Obtenido de [www.mamacoca.org](http://www.mamacoca.org)
- Quiceno, M. M., Marulanda, J., Gómez Gómez, J., Galán Hernández, F., & Mendoza, J. (2004). NO seas Mula. Bogotá D.C: Diego Steve García García.
- Semana. (s.f.). [Semana.com](http://www.semana.com). Obtenido de <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-regreso-de-las-mulas/412819-3>
- tiempo, E. (s.f.). [eltiempo.com](http://www.eltiempo.com). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3852197>
- Fundación Esperanza (2001), Tráfico de personas en Colombia Memorias, Fundación Esperanza. Bogotá 2001
- Fundación Esperanza (2002), Tráfico de Personas, “Naufragio de los sueños”, Fundación Esperanza, Bogotá 2002

- Fundación Esperanza (2002), Tráfico Internacional de Mujeres Colombianas, Análisis del tratamiento periodístico, Fundación Esperanza, 2002
- Fundación Esperanza (2003), Trata de personas y Desplazamiento Forzado. Fundación Esperanza.

## REALIDAD SOCIO-JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL PERÚ



**Julio César Matos Quesada**  
Universidad César Vallejo, Perú  
juliocmq1@hotmail.com  
ORCID: 0000-0002-3873-6625

**DOI:** 10.37594/cathedra.n15.471

Fecha de recepción: 09/02/2021

Fecha de revisión: 15/02/2021

Fecha de aceptación: 27/03/2021

### RESUMEN

Aquella persona que ha sido victimizada por un evento, hecho o conducta delictiva, sin haberlo deseado, ingresa al ámbito procesal penal, a efectos de solicitar tutela y protección por parte del Estado, el mismo que, es ejercido en alguna medida por el representante del Ministerio Público. Por tanto, el Fisco penal provincial, iniciará una serie de investigaciones para dar con el paradero del responsable, acumularán el mayor número de elementos de convicción, y solicitará su respectivo requerimiento acusatorio, una vez haya identificado y ubicado al autor o autores. Hasta aquí, no pasa de la teoría, la suposición que la víctima es protegida por el Estado de manera integral; sin embargo, en los países sudamericanos, y sobre todo en el Perú, el rol de la víctima no ha tenido el protagonismo que la doctrina ya viene asignándoles, desde los primeros trabajos de Hans von Hentig y de Benjamin Mendelshon, en la década de cuarenta del siglo XX. Ante ello, el presente trabajo trata de vislumbrar la escasa labor del Estado a través de sus instituciones “tutelares”, en cuanto a la protección y tutela de los derechos del agraviado de un delito, ya que nuestra normatividad es deficiente, y si bien, el nuevo código procesal penal del año 2004, y habiendo entrado en vigencia el año 2006, tiene buenas intenciones al tener varios artículos específicos sobre el tratamiento jurídico de la víctima, habiéndose asignado varias denominaciones: agraviado, perjudicado, querellante particular, y actor civil. Ante ello, también se ha acudido a las normas internacionales sobre protección de los derechos de las víctimas, las mismas que solo son mencionadas por algunas normas internas, pero de nada sirven si su aplicación es nula, y son invocadas por autoridades del sistema jurídico penal.

**Palabras clave:** Realidad socio jurídica, víctima, protección a la víctima, asistencia a la víctima, tutela jurisdiccional a la víctima.

## SOCIO-LEGAL REALITY OF THE VICTIM OF CRIME IN PERU

### ABSTRACT

That person who has been victimized by a criminal event, fact or conduct, without having wished, enters the criminal procedural field, in order to request guardianship and protection from the State, which is exercised to some extent by the representative of the Public ministry. Therefore, the provincial criminal prosecutors will initiate a series of investigations to find the whereabouts of the person responsible, will accumulate the greatest number of elements of conviction, and will request their respective accusatory request, once they have identified and located the author or authors. So far, it does not go beyond the theory, the assumption that the victim is protected by the State in an integral way; However, in South American countries, and especially in Peru, the victim's rum has not had the prominence that the doctrine has already assigned them, since the first works of Hans von Hentig and Benjamin Mendelshon, in the 1940s. 20th century. Given this, this work tries to glimpse the limited work of the State through its "tutelary" institutions, regarding the protection and guardianship of the rights of the victim of a crime, since our regulations are deficient, and although, The new criminal procedure code of 2004, and having entered into force in 2006, has good intentions by having several specific articles on the legal treatment of the victim, having been assigned various names: aggrieved, injured, private plaintiff, and civil actor. In view of this, international norms on the protection of victims' rights have also been used, which are only mentioned by some internal norms, but they are useless if their application is null, and are invoked by authorities of the criminal legal system .

**Keywords:** Socio-legal reality, victim, protection of the victim, assistance to the victim, jurisdictional protection of the victim.

### ESCENARIO DE LA VÍCTIMA EN LA ACTUALIDAD

Luego de un extenso trabajo de campo para tener un conocimiento cabal y objetivo de la realidad socio-jurídica de las víctimas y perjudicados de un ilícito penal (encuestas, análisis de expedientes, análisis documental, etc.) nos encontramos con una realidad crítica, en la que la víctima, aparte de ser sobrevictimizada, queda en el más absoluto desamparo por parte del Estado.

Más allá de lo estipulado en la normativización penal, procesal (penal como civil) y penitenciaria referido a las víctimas, es evidente que no son eficazmente aplicados por los magistrados en su gran mayoría. La víctima puede y debe demandar al estado por el derecho de su no victimización y a una vida armoniosa y digna, pero, lamentablemente, la atención estatal y general se centra en el delincuente, lo que produce con toda razón la irritación de todos los criminólogos. Sus argumentos

son insoslayables y muchos de ellos de gran validez. Se trata hoy de proteger al delincuente para no decretar su detención sin los debidos recaudos procesales, dado que existe una presunción de inocencia de su culpa hasta que una sentencia pruebe lo contrario presunción que en la práctica se invierte convirtiendo al victimario en víctima del sistema penal). Reubicarlo socialmente mediante patronatos y comités integrados por miembros de las llamadas “fuerzas vivas” y liberados y ex reclusos. Y a todo esto nadie recuerda que fue lo que acontece con la víctima una vez producido el delito que los perjudica. Dentro de las circunstancias que impiden judicial y socialmente el resarcimiento del daño a la víctima encontramos:

- ◆ Casos en que, si bien el daño se encuentra legislado como una pena publica (en la sentencia condenatoria) rara vez se efectivizan por el sentenciado. Si se efectiviza, solo lo es en una parte de lo decretado en la sentencia y no en su totalidad.
- ◆ Los códigos procesales penales no prevén las formas de ejecutar las sentencias.
- ◆ En muchos casos el condenado no posee medios de solvencias para hacer estéril el cumplimiento de la sentencia.
- ◆ El resarcimiento del daño no varía de acuerdo al delito y al bien jurídico tutelado en casos de juicios civiles.
- ◆ La duración de los juicios civiles es extensa, y se hace poco sencilla la realización de la prueba, el resarcimiento del daño es objeto de forma alternativa o extrajudicial y por debajo de lo fijado por la sentencia.
- ◆ No se respetan los principios de celeridad ni economía procesal, los que generan una sobre victimización a las víctimas y perjudicados.
- ◆ Al Estado le preocupa otorgar amnistías, indultos y otros beneficios a los sentenciados, dicen ellos por razones de política criminal, más no hacer cumplir el pago de la reparación a las víctimas.

Es en estos ejemplos, en que el resarcimiento en materia de daños y perjuicios irrogados es poco menos que nulo. De allí que el Estado subroga a los victimarios insolventes en múltiples delitos en que fallaron sus instituciones o, cuando algún miembro de ellas aparece como condenado por algún tribunal penal.

Muchas veces las víctimas ni siquiera están enteradas de su derecho a la reparación material. Desconocen la ley o nada se les ha informado en sede judicial. Después del delito la víctima suele ser damnificada, ahondando su desesperación. Ello ocurre de diferentes maneras comprobables. Sólo se le permite la persecución penal cuando de índole privado. En gran medida se restringe su cooperación en el esclarecimiento del hecho cometido en su contra, así como se le interroga en



las investigaciones de manera formal –solo por cumplir- mas no para tener un cabal detalle de los hechos suscitados; participa en careos y se le reciben pruebas, los que no son tomados en cuenta.

Es en la consideración de la reparación del daño y en su persecución penal y civil donde va a padecer su importancia, ya que cuando acude a los estrados policiales no logra conformar en el tiempo debido pretensión. Hay lesiones como la perdida de la vida o la parálisis y la imposibilidad de locomoción, que se encuentran dentro de categoría denominada: daños permanentes, que nunca se podrán repararse sino por los medios que el hombre invento y el derecho consagro: la indemnización monetaria que debería en determinados casos ser automática, sin que la víctima llegue al camino judicial, para tras un largo tiempo, cansada de atisbar la luz en uno de sus extremos. El resarcimiento moral y material del daño emergente y lucro cesante, se marcan las leyes penales para ser demandado en sede penal, difícilmente llegue en el tiempo requerido en que la víctima lo necesita para mitigar su preocupante situación y la de toda su familia. Habrá que esperar la sentencia del juicio penal. Otras de las posibilidades que la ley ofrece son recurrir en sede civil. Esto implica nuevos gastos, tiempos y resultado dudoso.

La condena al pago de indemnización puede dar lugar a un nuevo juicio de ejecución de sentencia y a la inhibición en el registro de la propiedad de inmueble u otras ficciones. No hay bienes ni posibilidad de cobro del daño causado. Solo pérdida de tiempo y la profundización del sentimiento de victimidad, legitimado a la Ley, o al menos, desvirtuando sus finalidades.

### **LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU REALIDAD ACTUAL**

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en nuestro sistema jurídico se encuentra plenamente establecido en la Constitución Política, sin embargo, al ser un precepto de rango constitucional muy importante, es cumplida de manera restrictiva y selectiva en algunos casos concretos, específicamente en aquellos procesos de naturaleza penal que se detallan a continuación, de la cual es materia esta tesis.

Lo dicho anteriormente se verifica en el trabajo de campo que he realizado mediante las encuestas, análisis de expedientes, recopilación de datos estadísticos del poder judicial, ministerio público y de la policía nacional, así como en la observación de la realidad socio-jurídica (entendido esto a los casos penales) por mi condición de abogado. Refiriéndome a los casos específicos (procesos penales) llevados a cabo en los juzgados penales del Callejón de Huaylas, la Tutela Jurisdiccional Efectiva si es aplicada por el órgano jurisdiccional, pero en algunos casos restringe este derecho de todo ciudadano y, muchas veces es selectivo (se aplica con celeridad y es favorable) para una de las partes. Esto lo podemos constatar en la exposición de algunos casos concretos suscitados en

la realidad.

En primer lugar, el ciudadano que reside en la ciudad si tiene la facilidad de acudir ante el órgano judicial por ser accesible y porque tiene cerca al Ministerio Público y las comisarías de la Policía Nacional (esperando que el juzgador le haga justicia o no). En segundo lugar, muchos casos en los que las víctimas no tienen recursos suficientes para trasladarse desde su comunidad a la ciudad para denunciar hechos delictivos ni tampoco poder acceder a los servicios profesionales de un abogado son comunes día a día. Razón por la cual muchos delitos no son denunciados (los que vienen a formar parte de la llamada victimización desconocida u oculta) ya que las autoridades pertinentes no dan las facilidades del caso para la protección y tutela jurisdiccional de estas personas por ser de escasos recursos económicos. Es el caso de los jueces de paz no letrados (en algunas comunidades y pueblos solo existen gobernadores que cumplen esa tarea) que recurren a lo más fácil, remitir el caso a un juez de paz letrado radicado en otro lugar, aduciendo no ser de su competencia o no tener suficientes recursos de logística para solucionarlo, a pesar de existir un reglamento y el precario y arcaico Código de Procedimientos Penales (del año 1940), así como del Código Procesal Penal (del año 1991).

Otro detalle se verifica en los procesos penales dirigidos contra las empresas mineras existentes, cuyas actividades han generado una serie de hechos delictivos como: contaminación ambiental (causando un grave perjuicio a la población aledaña), envenenamiento de las aguas de los riachuelos aledaños (causando la muerte de animales y plantaciones), daños materiales a las viviendas aledañas a los campamentos mineros por las explosiones. Estos hechos fueron denunciados ante la autoridad judicial, quien lejos de proteger los derechos de la comunidad, se dictó una medida cautelar para proteger las actividades mineras de las protestas del campesinado, aduciendo que se protegía la inversión privada que estaba generando puestos de trabajo. Pero la denuncia y persistencia de algunos medios de prensa lograron que recién las autoridades judiciales den la razón a las víctimas de la contaminación minera, imponiendo una reparación civil a favor de dicha comunidad, la misma que aunque irrisoria, logró disminuir estas actividades dañinas.

Como vemos del caso anterior, la tutela jurisdiccional efectiva se dirigió en primer término hacia los intereses de una compañía minera, mas no para la comunidad campesina víctima de las actividades contaminantes de dicha actividad minera. No es razonable que se tutele los derechos de una empresa por ser un grupo de poder muy fuerte (tanto político como económico) y que sea influyente en nuestras autoridades como quedó demostrado en el caso mencionado líneas arriba.

## PRESCRIPCIÓN NORMATIVA PERUANA EN CUANTO A LA ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA

La normatividad entendida como el ordenamiento o conglomerado de normas jurídicas vigentes, a lo largo de la historia peruana no ha sido muy complaciente en el tratamiento específico de los derechos de las víctimas de un hecho punible.

En primer lugar, verificamos que nuestra carta fundamental no prescribe en artículo alguno de manera específica sobre los derechos de las víctimas de un ilícito penal. Así, por ejemplo, dicha **Constitución Política**, en su artículo primero establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, el cual es un contenido general que, en términos jurídicos, se convierte en un principio general del Derecho, es decir en un medio de interpretación sistemática para el conjunto del texto constitucional, así como sobre otras normas de menor jerarquía.

Como vemos, dicho artículo protege a la persona humana en términos generales por lo que podríamos deducir que aquellas personas que han sido vulnerados sus derechos, como por ejemplo las víctimas de un hecho punible, tienen una protección constitucional, aparentemente.

Seguidamente, en el artículo segundo de nuestra Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. También hace mención a que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El mencionado artículo reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, que es el centro de todos los valores y el supuesto fundamental de la existencia de un orden mínimo, en nuestra sociedad, así como también menciona otros derechos (identidad, Integridad moral, psíquica y física, libre desarrollo y bienestar). Cabe resaltar que se establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (vida, integridad física, patrimoniales, etc.), el mismo que también está regulado en Código Civil, en su primer artículo (Derecho de las personas), pero, es de advertir que, en cuanto al concebido, éste sí tiene una protección constitucional.

Los derechos fundamentales de toda persona, como hemos visto, se encuentran prescritos esencialmente en la Constitución Política del Estado, sin embargo, los derechos que tienen las víctimas de un delito (directa o indirectamente) no están plasmados en dicha carta magna de manera taxativa, sólo se habla de la persona humana en general e incluso de aquellas personas que han cometido delitos, otorgándoles sus derechos y beneficios procesales, penitenciarios, etc. (artículo 24º: Incisos: c., f., g., etc.), mas no a aquellas personas que han sufrido y sufren el perjuicio ocasionado por el hecho punible (doloso o culposos).

La Constitución en el artículo 2°, en su inciso 24, acápites: h. prescribe que:

“h. Nadie debe ser **víctima** de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”.

Aquí se hace referencia a que nadie “debe ser” víctima, o sea se extiende a aquellas personas que todavía no han sido pasibles de un hecho punible; en lo que la doctrina denomina *ex ante*, más no se hace referencia a aquellas personas que ya han sido o son víctimas de un delito: *ex post delicti*. Por eso considero que existe un vacío normativo en cuanto a la protección constitucional de la víctima de un delito.

En cuanto a los delitos en particular la **Constitución** peruana señala expresamente en su art. 2°:

Inciso: 4. “... Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.”

Inciso: 7. “... Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Estos incisos hacen alusión expresa de algunos delitos en particular y menciona a los agraviados, pero como se advierte, son sólo algunos casos que la constitución menciona. Considero que no es necesario que se especifiquen todos los delitos, que para eso está nuestro Código Penal, sino que se debe establecer en forma clara y precisa sobre la protección y compensación a la víctima de un hecho punible por parte del estado y de la sociedad.

Un aspecto que cabe destacar es lo referente a la Seguridad personal y a la Seguridad Social a que hace referencia nuestra Constitución en su artículo 2°, inciso: 24 y artículo: 10, respectivamente.

En segundo lugar, ubicamos específicamente a nuestro ordenamiento punitivo. Esto es, el Código Penal de 1991, en el cual ninguno de sus artículos se refiere a la protección de la víctima de un hecho punible. La orientación garantista que tuvo el legislador fue la de descriminalizar muchos

tipos penales del Código Penal de 1924, y dar mayor énfasis en la protección del inculcado con principios como: humanidad de las penas, presunción de inocencia, igualdad, etc., lo que no es malo, pero que no justifica la postergación de incluir a las víctimas de los delitos en dicho cuerpo legal, garantizando y protegiendo sus derechos, así como su reparación real y efectiva del daño ocasionado por el hecho punible cometido por el victimario.

El **Código Penal** vigente “menciona” a las víctimas en el Libro Primero: Parte General, Título: III.- De la Penas, Capítulo: II.- Aplicación de la Pena, artículo 45°: “El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena deberá tener en cuenta (...) 3.- Los intereses de la **víctima**, de su familia o de las personas que de ella dependen”. También en el artículo 46°, refiriéndose a los principios para la medición de la pena, señala en su último párrafo lo siguiente: “(...) El juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto sea posible o útil, de la **víctima**”.

En cuanto a la Reparación Civil, el Código Sustantivo lo prescribe en el Título VI: De la Reparación Civil y Consecuencias Accesorias, Capítulo: I.- Reparación Civil, Artículo: 92°, el cual señala lo siguiente: “La Reparación Civil se determina conjuntamente con la pena”.

Y sobre el contenido de la reparación civil, se establece en el artículo 93° de dicho Código, que:

“La reparación comprende:

- 1.- La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
- 2.- La indemnización de los daños y perjuicios”.

Vemos que la ley instituye en la reparación civil, tanto la restitución como la indemnización, dando amplitud a la restitución por cuanto señala también: o el pago de su valor; la indemnización del daño forma propiamente el perjuicio que se causa al ofendido con la conducta o hecho delictuoso. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas del delito no sólo son la pena o la medida de seguridad sino también la reparación civil.

Nuestro Código sustantivo solo nos da la alternativa de la reparación civil en el tratamiento de las víctimas de un hecho punible como el mejor medio para resarcir el daño causado, pero se omite la protección de las mismas (víctimas) y también su cumplimiento de manera eficaz, efectiva y real.

En tercer lugar, verificamos el ordenamiento procesal penal. En el proceso penal la principal facultad que anhelan las víctimas está vinculada con los intereses resarcitorios, pero aún es necesario

tener en cuenta también que es posible que este sujeto procesal ejerza otro tipo de facultades en el curso del proceso. El proceso penal se basaba en el código de procedimientos penales de 1940 así como de algunos artículos promulgados del código procesal de 1991. En ese sistema normativo la víctima no tuvo una participación activa porque el procesado era el protagonista de dicho proceso.

El proceso se lleva a cabo entre las partes: acusadoras y acusadas. Una de las partes acusadoras es lo que la doctrina denomina: el Acusador Privado que es la parte acusadora necesaria en los procesos penales por hechos delictivos perseguibles sólo a instancia de parte, en los que queda excluida la intervención del Ministerio Público; y el Actor Civil que es aquella persona que puede ser el agraviado con el hecho punible, o sea quien directamente ha sufrido un daño delictivo. Aquí no sólo nos referimos a la víctima de un delito, sino también al perjudicado (familiares, etc.) que en los casos en que la víctima haya sido asesinada, los agraviados serían los familiares y tendrían todo el derecho de pedir una indemnización por la pérdida del ser querido. Para ser considerado como actor civil, el perjudicado o el agraviado deben constituirse como tal ante la autoridad competente y deducir la correspondiente pretensión patrimonial en el proceso penal.

Vemos que en el artículo 54° del Código de 1940 y artículo 82° del Código Penal de 1991 precisaban que podían constituirse en parte civil o actor civil el agraviado, o en su defecto (siempre que el agraviado directo o sujeto pasivo del delito esté imposibilitado de hacerlo: fallecimiento, ausencia o incapacidad) su cónyuge, descendientes, ascendientes, tutor, curador y otra persona que lo represente legalmente. Faltando el agraviado –por muerte o incapacidad- puede apersonarse el pariente más cercano, según las leyes de la herencia. Si el perjudicado no quisiere constituirse en parte, sus parientes no pueden sustituirlo la intervención de los parientes es subsidiaria de la voluntad del perjudicado, no su reemplazante.

De lo dicho anteriormente las víctimas de un hecho punible son tratadas en el rubro del Actor Civil. La víctima es pues, denominada actor civil en el proceso penal, pero está limitado sólo a estar presente en las audiencias, más no participar activamente en las mismas ya que las normas pertinentes no lo prescriben de ese modo, y no le devuelven la solución de su conflicto a la víctima con su victimario.

En cuanto a las Personas Jurídicas se constituyen en parte civil por medio de su representante legal, y en lo que concierne el Estado, por el procurador público (Decreto Ley N° 17537). Si hay concurrencia de peticiones, sólo uno puede ser constituido en parte civil, en cuyo caso se acude a las prioridades sucesorias fijadas en el Código Civil. Considerando al Estado como víctima de algún delito, está representado por el Procurador Público conforme al Decreto Ley N° 17537, salvo

cuando se trate de entidades estatales que tienen personería jurídica propia, cuya representación y defensa es realizada por sus propios personeros legales, como es el caso de las municipalidades, de las empresas del Estado o de los Bancos estatales, como el Banco de la Nación. La personería del procurador público, al amparo del Decreto Ley N° 18850, alcanza a la defensa de los intereses y derechos patrimoniales del Estado y al mantenimiento del orden constitucional.

Finalmente, si el agraviado opta por la vía civil, ya no puede acudir a la vía penal o viceversa, además tampoco podría acudir simultáneamente hacia ambas vías, lo que se justifica para evitar precisamente la litispendencia.

En cuanto al tratamiento que hizo el **Código de Procedimientos Penales** (promulgado en 1930 y vigente a partir de Enero de 1940) sobre la víctima de un delito es con respecto a su constitución en parte civil, el cual, señalaba, debía presentar la solicitud oral o escrita correspondiente a la autoridad judicial.

El artículo 285° del Código de Procedimientos Penales establecía que la sentencia condenatoria debe contener, entre otros puntos, el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla. Una disposición muy interesante es el contenido en su artículo 337°: La reparación civil ordenada en la sentencia firme, se hará efectiva por el Juez Instructor originario, a quien el tribunal correccional remitirá los autos. Este Código trató de garantizar la efectividad de la reparación, con lo cual de alguna manera se habría resarcido el daño ocasionado a la víctima.

La constitución en parte civil permitía al agraviado intervenir en el desarrollo de la instrucción, ofrecer pruebas, llevar peritos, interrogar a testigos, intervenir en las confrontaciones, acreditar el daño sufrido, etc. Tiene derecho de impugnar resoluciones: del auto que concede la libertad, señala el monto del embargo, deniega pruebas, etc.

Continuando con la línea procesal, se hace presente el **Código Procesal Penal de 1991**, el mismo que se encontraba en vacatio legis y sólo algunos de sus artículos estaban vigentes. En los últimos años el diseño del proceso penal ha cuestionado aquel postulado según el cual el imputado era el gran protagonista del proceso penal. Es por ello que conforme a las nuevas tendencias criminológicas la legislación procesal penal ha ido revalorando en gran medida el papel de la víctima.

En nuestra legislación vigente no existe aún un adecuado marco de garantías para tutelar los intereses de las personas afectadas por el delito, sin embargo, el Código Procesal Penal de 1991



(Promulgado el 25 de abril de 1991 mediante Decreto Legislativo N° 638) configuró una serie de derechos y garantías sobre este particular.

El **Código Procesal Penal de 1991** disponía, en resumen, los siguientes derechos y facultades de las víctimas en el proceso penal:

- ▶ Ofrecer pruebas para acreditar el delito y la entidad de la reparación civil.
- ▶ Interponer las impugnaciones que correspondan.
- ▶ Promover durante la instrucción incidentes sobre cuestiones que afecten su derecho indemnizatorio, en cuya virtud debe notificárseles de todas las diligencias del proceso.
- ▶ Concurrir al acto oral, participar en él activamente y, luego del debate probatorio, alegar fundamentando su derecho a la reparación civil, aunque no puede pronunciarse sobre la pena y la calificación del delito.
- ▶ Que la etapa procesal de la investigación tiene como una de sus finalidades determinar la existencia del daño causado.
- ▶ Que la acusación del fiscal debe contener el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civilmente responsable, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo.

Es de destacar la dación de los proyectos de reforma procesal penal como son los de los años 1995 y 1997, del Ministerio de Justicia (2003) y del Proyecto Huanchaco (2003).

Con respecto al Proyecto del **Código Procesal Penal de 1995**, tenemos los siguientes:

- ▶ La víctima puede intervenir en el proceso, previo apersonamiento.
- ▶ La víctima debe ser informada de los resultados del proceso.
- ▶ La víctima puede formular solicitudes probatorias.
- ▶ La víctima deberá ser escuchada antes de cada decisión que afecte su derecho.
- ▶ La víctima puede participar en el juicio y alegar al finalizar la vista, aunque sin pedir pena ni reparación civil.
- ▶ Se impone al fiscal o al juez la denominada diligencia de ofrecimiento de acciones, en cuya virtud se reconoce a la víctima el derecho de acceso al proceso penal que se está instruyendo y, por consiguiente, debe informársele sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en el procedimiento.
- ▶ Poder constituirse (la víctima o perjudicado en su caso) en actor civil y ser parte en el proceso.



En cuanto al Proyecto del **Código Procesal Penal de 1997** propone los siguientes derechos de la víctima:

- ▶ A intervenir en el proceso, personalmente o por intermedio de apoderado, siempre que se apersona debidamente.
- ▶ A ser informado de los resultados del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite.
- ▶ A formular solicitudes probatorias.
- ▶ A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite.
- ▶ A participar en el juicio oral. En la fase de alegatos no podrá concluir solicitando pena ni reparación civil.
- ▶ El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en el procedimiento.

Sólo como antecedente considero relevante expresar que, en los últimos años, ha sido de suma importancia la propuesta de dos proyectos de reforma del Código Procesal Penal:

**Primero:** el **Proyecto** de un nuevo Código Procesal Penal dado en noviembre del año 2003, elaborado por el **Ministerio de Justicia**, ello acorde a la Ley N° 28269 de fecha 04 de Julio del 2003 que delega facultades legislativas en materia procesal penal al Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado.

**Segundo:** que ha sido presentado por un grupo de procesalistas conocidos; ellos son: Florencio Mixán Mass, Víctor Burgos Mariños y Alfredo Pérez Galimberti. Los mencionados doctores han denominado a dicho trabajo: **Proyecto Huanchaco**, el cual, entre otras novedades e incorporaciones, prescribe sobre la víctima el texto siguiente:

- ▶ Considera agraviado: a la persona natural o jurídica lesionada directamente por el delito; al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o curadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona; a los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen; a las asociaciones, en aquellos hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses; a cualquier asociación que acredite interés, cuando se trate de hechos que importen grave afectación de los derechos humanos fundamentales, y hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas; o cuando impliquen actos de corrupción

pública o abuso del poder público y conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado; a las comunidades nativas y campesinas, en los hechos punibles que impliquen discriminación respecto de los miembros de su grupo social, destrucción de su hábitat, daño, sustracción o tráfico ilegal de sus bienes culturales.

- ▶ El agraviado tiene los siguientes derechos: si se trata de un delito de acción pública, cuando haya denunciado o compareciere en el procedimiento de cualquier manera, a ser informada acerca del sobreseimiento, la acusación y la sentencia; a recibir un trato digno y respetuoso; a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; a intervenir en la investigación y en el juicio oral, conforme a lo establecido por este Código; a examinar documentos y actuaciones, a ser informado verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; a aportar información durante la investigación; a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente; a requerir ante el Superior, la revisión de la desestimación o archivo de la denuncia dispuesto por el Fiscal; y a impugnar el sobreseimiento y la sentencia en los casos autorizados; a recibir asesoramiento jurídico por parte de un Abogado Defensor y a hacerse representar por él en las diligencias; a recusar por los motivos, forma y procedimientos previstos en este Código. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el proceso.
- ▶ En cuanto a la asistencia especial: la persona ofendida directamente por el delito podrá solicitar que su defensa sea ejercida directamente por una asociación de protección o ayuda a las víctimas, sin fines de lucro, cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses.
- ▶ A la persecución penal privada. Toda persona que se considere ofendida por un delito de persecución privada, tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, de conformidad con lo dispuesto en este Código.
- ▶ El representante legal del incapaz, por delitos cometidos en su perjuicio, gozará de igual derecho.
- ▶ Al patrocinio. Toda querella deberá ser patrocinada por un Abogado hábil para ejercer la defensa.
- ▶ El Colegio de Abogados proveerá el auxilio letrado al agraviado cuando éste carezca de recursos económicos y no exista otra institución que pueda auxiliarla.
- ▶ Si el delito es perpetrado en agravio de un incapaz desamparado, el Fiscal, al ejercitar la pretensión resarcitoria, queda de pleno derecho legitimado como actor civil.

- El actor civil podrá deducir la nulidad sustancial de actuados, ofrecer medios de prueba, participar en los actos de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recurso impugnatorio e inclusive contra sentencia absolutoria y demás que convenga a sus intereses conforme a ley.
- El actor civil no podrá solicitar la pena.

Luego de la elaboración de los proyectos antes mencionados (fundamentalmente del proyecto del Ministerio de Justicia y del proyecto Huanchaco), el 27 de julio del 2004 se promulgó el **nuevo Código Procesal Penal**, y se materializa mediante Decreto Legislativo N° 957 publicado **el 29 de Julio del año 2004**; el cual consta de 566 artículos, distribuidos en 7 libros.

Se destaca que en el libro primero se ubica todo lo relativo a la acción penal, jurisdicción y competencia, lo referente al **Ministerio Público** se ha de tener en cuenta que formará parte del pasado el que el Fiscal sea un mero director del llamado indagatorio preliminar, donde se da la preeminencia del actuar policial, el cual dicho sea de paso resulta deficiente, pues no se toman las providencias del caso, ni se respetan las garantías y Derechos de quienes intervienen, por lo que en este extremo se elimina la redacción de los llamados atestados y partes; es así, que el representante del Ministerio Público pasara realmente a cumplir su rol acusador, reuniendo para ello las pruebas necesarias durante la investigación preparatoria, debiendo oralizar estas de ser el caso durante el Juzgamiento, es decir que el Fiscal Provincial ya no será un mero cuasi-espectador de la investigación del delito, sino que se convertirá en un fiscal litigante, quien buscara sus pruebas, las que sean necesarias y que además les servirá de sustento en el juicio oral, por otro lado se tiene como innovación la figura de la acción civil, mediante el cual se permite su ejercicio cuando ello derive del hecho punible, corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito.

Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso; su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93° del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados, es decir la acción civil estará orientada al pago de la reparación civil. También se da la figura del **querellante particular**, quien sólo ha de intervenir en los procesos cuyo ejercicio de la acción penal sea privado, pudiendo instar al órgano jurisdiccional en busca no sólo de la sanción penal, sino también de la reparación civil.

El **nuevo Código adjetivo** es innovador –aunque insuficiente- en cuanto al tratamiento de la

víctima de un delito. Dicho cuerpo legal establece en su Libro Primero.- Disposiciones Generales; Título IV: LA VÍCTIMA, artículos 94° y siguientes, el cual contiene tres capítulos:

Capítulo I: El Agraviado,

Capítulo II: El Actor Civil,

Capítulo III: El Querellante Particular.

En el tratamiento específico de las víctimas, el nuevo Código Procesal Penal establece los siguientes:

- ▶ Que se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo.
- ▶ En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo 816° del Código Civil.
- ▶ El agraviado tiene derecho a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite.
- ▶ El agraviado tiene derecho a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite.
- ▶ El agraviado tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
- ▶ En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación o el proceso.
- ▶ El agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
- ▶ El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa.
- ▶ Así mismo, si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza.

Tenemos el **Código de Ejecución Penal** vigente promulgado el 31 de Julio de 1991, el cual hace mención a las víctimas del delito en el Título VII.- Asistencia Post Penitenciaria, en su artículo 127° (sobre las atribuciones de las Juntas de Asistencia), donde establece lo siguiente:

“Son atribuciones de la Juntas de Asistencia Post Penitenciaria: (...)

Inciso 2.- **Brindar asistencia social al liberado, a la víctima del delito y a los familiares inmediatos de ambos**”.

El antecedente de esta norma la encontramos en el Código de Ejecución Penal de 1985, el

mismo que creó las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria, y dentro de sus atribuciones se estableció en el artículo 144°, inciso “b”, la de: **“Brindar asistencia social al liberado, a sus familiares, a la víctima del delito y a los familiares de esta”**. En resumen, según la ley penitenciaria peruana, corresponde pues a las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria, dar asistencia social a las víctimas del delito y sus familiares, pero aun en los hechos, esta obligación, sólo sigue siendo un buen propósito legal.

Me parece una disposición muy interesante, pero a la vez utópica, porque estas juntas de asistencia nunca cumplieron su función desde que se promulgó el presente Código, ni en el anterior, y es más, ni siquiera cuenta con una adecuada reglamentación para poder otorgar una asistencia social a la víctima de un hecho punible así como a sus familiares inmediatos.

Finalmente, hacemos referencia **Código Civil**, el mismo que por Decreto Legislativo N° 295 se promulgó el 24 de Julio de 1984, derogando al anterior código de 1936 (de fecha 30 de agosto), el cual innovó en gran medida la legislación en materia civil. Tenemos el caso de los derechos de las personas que en su artículo 1° prescribe que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Está muy claro que toda persona tiene protección por parte del estado, así lo señala en el artículo 1° de la Constitución Política del Perú (tema tratado líneas arriba).

Es obvio que la víctima de un delito deba estar comprendida dentro de esta norma civil, por cuanto necesita de una protección y resarcimiento del perjuicio que han sufrido. También se aprecia que está comprendido el concebido como sujeto de derecho, por lo que en el ámbito penal son delitos los perpetrados en contra del concebido (aborto, etc.). De esta manera podemos decir que el código civil da una protección, como principio general; a la persona desde la concepción hasta la muerte de dicha persona.

La persona como víctima propiamente dicha es resarcida -en alguna medida- en el aspecto económico en el Libro VII.- Fuentes de la Obligaciones, Sección Sexta.- Responsabilidad Extracontractual. Esto es, que la persona que ha causado un daño a otra persona está obligada a indemnizarlo.

En lo civil se discute sobre la naturaleza de la responsabilidad que debe tener el agente (victimario), ya sea que se tiene que demostrar que hubo dolo o culpa (artículo 1969°) o por el simple hecho de causar un daño a otro (artículo 1970°). En el primer caso tenemos a la llamada Responsabilidad Subjetiva y al segundo supuesto la denominada Responsabilidad Objetiva. En la actualidad los civilistas se inclinan por la segunda teoría; ya que, si se demuestra que no hubo dolo

ni culpa en la causación del daño, simplemente el perjudicado quedaría desamparado, a su suerte.

Me parece muy importante esta norma, porque aquí se busca resarcir a la víctima del daño ocasionado por el delito (por ejemplo: los delitos culposos cometidos por accidentes de tránsito) o sea ex post, cuando la persona ha sido pasible de un delito, y no como las normas penales que protegen a la persona antes del evento delictivo y no a las personas que han sufrido el hecho punible. Sería importante que esta norma alcance a todos los daños cometidos a la víctima, ya que en la actualidad sólo se aplique específicamente en los delitos culposos y delitos contra honor.

Debemos recordar que víctima es la persona que ha recibido el daño de manera directa, y el perjudicado puede ser la familia, amigos cercanos, la pareja, etc. También la víctima puede ser perjudicada a la vez. Por ejemplo: en un homicidio, la víctima es el asesinado y el perjudicado es su familia. En este caso la familia tiene el derecho de pedir la indemnización por el daño que le ha producido la muerte de su ser querido.

### **IMPLICANCIAS SOCIO-JURÍDICAS RELATIVAS A LA VÍCTIMA DEL DELITO**

Es evidente que la comisión de un delito en contra de la víctima produce un daño, sea: físico, moral y/o patrimonial; pero también debemos tener en cuenta que dichos daños de alguna manera son extensivos en el sentido de que no sólo afectan a dicha víctima, sino también a su entorno más cercano y querido (familia, amigos, pareja, etc.), e incluso algunos delitos –como los de violación de la libertad sexual de un menor de edad- hieren la susceptibilidad de la sociedad en su conjunto.

Estos hechos producen una serie de consecuencias socio-jurídicas a la víctima y a los perjudicados con el ilícito penal. Tenemos:

1. Sobrevictimización de las víctimas, el mismo que se produce cuando una persona que ha sido afectada con un hecho punible acude ante el órgano judicial en busca de tutela jurisdiccional, y no se le atiende como debe de ser, no hay celeridad procesal ni economía procesal, la víctima y los perjudicados no pueden entrevistarse con los jueces. En conclusión, el Sistema Jurídico es ineficiente.
2. Se da un papel protagónico al delincuente en el proceso, mas no a la víctima y/o perjudicados.
3. Ante la ineficiencia del Poder Judicial, la víctima y su familia comienzan a hacerse justicia por su propia mano. Se está creando una especie de jurisdicción popular. Tenemos los casos de los pueblos jóvenes en los que a los delincuentes que se les encuentra infraganti los apalean, los queman vivos, los entierran y otros castigos severos, ya que la población

se indigna ante la ineficacia con que actúan las autoridades policiales y fiscales.

4. Se ha generado una desconfianza generalizada en el Poder Judicial debido a las informaciones que emiten los medios de comunicación ante la ola de corrupción que reina en nuestro país. Sólo tienen justicia los que tienen dinero.
5. Se está produciendo una especie de inestabilidad en la convivencia social, debido a la inseguridad jurídica producida por el abandono de la víctima por parte del Estado. Ahora, nadie puede confiar en nadie. Tenemos los casos producidos entre el campesinado del Callejón de Huaylas.

## **ANHELOS AXIOLÓGICOS Y PRINCIPISTAS EN FAVOR DE LA VÍCTIMA DEL DELITO**

La necesidad de que la víctima obtenga la reparación o indemnización del daño sufrido tiene diversas aspiraciones principistas y fundamentos. Primero, se señala que con frecuencia el interés real de la víctima no consiste en la imposición de una pena sino, en cambio, en una reparación por las lesiones o los daños causados por el delito. Por otro lado, se destaca la necesidad de evitar las consecuencias negativas de los procesos formales de criminalización y especialmente, de la pena privativa de libertad. También se reconoce la necesidad de hacer efectiva la idea de que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico.

En el marco del Derecho Internacional, la **“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder”** reconoce, entre otros, el derecho a la pronta reparación del daño. Se afirma que el derecho internacional supone la protección privilegiada de la víctima, exige una estrategia de privatización de conflictos como modelo político criminal para la descriminalización de ciertos delitos e implica la necesidad de otorgar a la víctima mayor intervención en el tratamiento de los conflictos tendentes a acortar las diferencias con el infractor, reducir el costo social de la pena, asegurar la posibilidad de indemnización, etc.

Dicha Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, por **resolución: 40/34**. La misma que en su **Anexo** se establecen lineamientos para implementar el resarcimiento y la compensación a las víctimas del delito. Ellos son:

### **Resarcimiento:**

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el



reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.
10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad.
11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi-oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

En el **Primer Simposio de Victimología**, reunidos en la ciudad de Jerusalén en 1973, señalaron una serie de recomendaciones a los gobiernos de las Naciones del mundo, en su punto V, titulado “Compensación”. En dicho punto se estipula:

1. Todas las Naciones deberán, como cuestión de urgencia, considerar la implantación de sistemas estatales de compensación a las víctimas del delito; así como tratar de alcanzar el máximo de eficacia en la aplicación de los sistemas existentes y los que deben ser establecidos.
2. Deben establecerse todos los medios al alcance para difundir información sobre los modelos de compensación y debe estimularse la participación de organismos apropiados gubernamentales o no a su instauración.
3. Todos los modelos existentes de compensación deben ser investigados y valorados con miras a extender su aplicación, teniendo en cuenta los requerimientos respectivos de las diversas comunidades en las cuales operan.

### **RESPECTO A LA ASISTENCIA SOCIAL A LA VÍCTIMA DEL DELITO**

Uno de los principales objetivos de la Victimología es rescatar a la víctima del olvido al que el protagonismo del victimario la ha empujado. En este sentido, la Victimología promueve el brindar a aquellas personas victimizadas, asistencia (no confundir con asistencialismo), ayuda, soporte y

contención tanto material como moral a los fines de facilitarle a la víctima la reconstrucción (que siempre será parcial, pues la víctima sufre una pérdida) de su mundo.

Al respecto el Anexo de la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, sostiene que las víctimas del delito deben tener acceso a asistencia frente a hechos delictivos.

#### **Asistencia:**

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.
15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.
16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.
17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el párrafo 3 – supra- (discriminación).

En muchos países se han implementado programas tendientes a asistir a las víctimas de delitos. Ejemplo de ello es el Programa de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos. Lamentablemente en la mayor parte de estos programas se prioriza el aspecto económico en detrimento de otros que pueden llegar a ser de mayor importancia.

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Aniyar, L. (1969), *La Victimología: Consideraciones generales*. Maracaibo, Centro de Investigaciones Criminológicas, Facultad de Derecho, Universidad del Zulia.
- Beristain, A. (1998), *Criminología y Victimología. Alternativas recreadoras al Delito*. Santa Fe de Bogotá, Editorial Leyer.
- Beristain, A. (1999), *Nuevas Soluciones Victimológicas*. Ciudad de México, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.
- Beristain, A. (2000), *Victimología. Nueve palabras clave*. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.
- Bermúdez V. (1997), *La Víctima en el Proceso Penal. Su régimen legal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay*. Buenos Aires, Ediciones Depalma.
- Bernales, E. (1998), *La Constitución de 1993. Análisis Comparado*. 4ª edición. Lima, Rao

Editora.

Bramont, L.; Bramont-Arias, L. (2000), Código Penal Anotado. 3ª edición. Editorial San Marcos. Lima – Perú.

Bustos, J.; Larrauri, E. (1993), Victimología: Presente y Futuro. 2ª edición. Santa Fe de Bogotá.

Cajías, H. (1978), Victimología, en: Revista Boliviana de Ciencias Penales, La Paz, Año N° 1, N° 1.

Cancio, M. (2001), Conducta de la Víctima e Imputación Objetiva en Derecho Penal. 2ª edición. Bogotá, Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.

Cerón, L. (2000), La Víctima: El Protagonista Desplazado del Conflicto Penal. Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Fernández, M. (2004), La Intervención de la Víctima en el Proceso Penal (Especial referencia a la acción civil). Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.

Ferrajoli, L. (1998), Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. 3ª edición. Valladolid, Editorial Trotta S.A.

Galves, T. (1999), La Reparación Civil en el Proceso Penal. Lima, Editorial Idemsa.

García Pablos, A. (2001), Criminología, Una introducción a sus fundamentos teóricos. 4ª edición. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.

Garrido, V.; Stangeland, P.; Redondo, S. (1999), Principios de Criminología. 3ª edición, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.

Herrera, M. (1996), La Hora de la Víctima (Compendio de Victimología). Madrid, Editorial de Derecho Reunidas S.A.

Hikal, W. (2015), Glosario de Criminología, Criminalística y Victimología Criminal, 2da edición, Ciudad de México, Editorial Flores.

Hinostroza, A. (2004), Comentarios al Código Procesal Civil. 2ª edición. Lima, Gaceta Jurídica.

Hurtado, J. (1987), Derecho Penal – Parte General. 2ª edición, Lima, Editorial Eddili.

Kant, I. (1962), Principios Metafísicos del Derecho. Puebla, Editorial Cajica.

Landrove, G. (1998), La moderna Victimología. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.

Maguire, M.; Morgan, R.; Reiner, R. (2002), Manual de Criminología. 2da edición, Ciudad de México, Colección Textos Jurídicos Universitarios. Traducción realizada por Arturo Aparicio Vázquez. Editorial Oxford University Press México S.A.

Marchiori, H. (2003), Criminología. La Víctima del Delito. 4ª edición, Ciudad de México, Editorial Porrúa.

Matos, J. (2016), La Víctima y Su Tutela en el Sistema Jurídico-Penal Peruano. Fundamentos Victimológicos, Lima, Editorial Grijley.

- Neuman, E. (2001), *Victimología. El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales*. 3ª edición. Buenos Aires, Editorial Universidad.
- Núñez, J. (2004), *La Víctima*. Sucre, Editorial Proyecto Sucre. Ciudad Universitaria.
- Oré, A. (1999), *Manual de Derecho Procesal Penal*. 2ª edición. Lima, Editorial Alternativas.
- Peña-Cabrera, R.; Frisancho, M. (2000), *Comentarios al Código de Ejecución Penal*. 2ª edición. Lima, Editorial Fecat.
- Prado, V. (2000), *Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú*. Lima, Editorial Gaceta Jurídica.
- Quiroz, W. (2001), *Lecciones de Derecho Penal General*, 1ra edición, Lima, Editorial Imsergraf.
- Reyes, J.; León, R. (2002), *Victimología*. 3ª edición. Guatemala, Tipografía Nacional, 2002.
- Reyna, L. (Coordinador). (2003), *Victimología y Victimodogmática. Una aproximación al estudio de la Víctima en el Derecho penal*. Lima, ARA Editores.
- Ramírez, R. (1983), *La Victimología*. Bogotá, Editorial Temis, 1983.
- Rivera, A. (1997), *La Victimología ¿Un problema criminológico? Biogenética, biotecnología, fecundación “in vitro” y víctimas sociales. Enfoque Holista y Constitucional*. Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídica-Radar.
- Rodríguez, J. (1999), *La reparación como sanción jurídico-penal*, Lima, Editorial San Marcos.
- Rodríguez, L. (2005), *Victimología Estudio de la Víctima*. 9na edición. Ciudad de México, Editorial Porrúa.
- Roxín C. (2001), et al. *De los Delitos y de las Víctimas*. 1ª reimpresión de la 1ª edición. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc.
- Roxin, C; Muñoz, F. (2000), *Derecho Penal. Nuevas Tendencias en el Tercer Milenio*. Lima, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 2000.
- San Martín, C. (2000), *Derecho Procesal Penal*. Vol. 1, 2ª reimpresión de la primera edición. Lima, Editorial Grijley.
- Silva, J. (1994), *La Victimología desde la Política Criminal y el Derecho Penal. Introducción a la “Victimodogmática”*, en: *Revista Peruana de Ciencias Penales*, N° 4. Lima, Editorial Grijley.
- Solé, J. (1997), *La Tutela de la Víctima en el Proceso Penal*. Barcelona, Editorial Bosch.
- Solís, A. (1997), *Criminología – Panorama Contemporáneo*, 3ª edición. Lima, Editorial Intercopy.
- Sproviero, J. (2000), *La víctima del delito y sus derechos*. Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma.
- Tamarit, J. (1998), *La víctima en el Derecho penal*. Barcelona, Editorial Aranzadi, 1998.
- Vassallo, E. (2000), *La Acción Civil en el Proceso Penal*, Lima, Editorial San Marcos.

- Villavicencio, F. (2000), Introducción a la Criminología. 1ª reimpresión de la 1ª edición. Lima, Editorial Grijley.
- Zaffaroni, E.- (1998), En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. 2ª reimpresión. Editorial Ediar, Buenos Aires – Argentina.
- Zamora, J. (2002), Derecho victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano. Ciudad de México, Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Zarzosa, C. (2001), La Reparación Civil del Ilícito Penal. Lima, Editorial Rodhas.

**Dr. Julio César Matos Quesada.**

Abogado. Doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Magister en Derecho Penal por la misma Universidad. Ha cursado los siguientes estudios de Post Grado: Diplomado en Criminología y Victimología por la Universidad Nacional Federico Villarreal; Diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, y por la Technical and Business Institute; Diplomado en Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Litigación Oral por el Ilustre Colegio de Abogados de Ancash; Diplomado en Economía por la Universidad Nacional de Trujillo, Diplomado en Reforma Procesal Penal, Argumentación Jurídica y Litigación Oral por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, y, Diplomado en Delitos Contra la Administración Pública por el Ilustre Colegio de Abogados e Ancash. Cuenta con experiencia laboral como Coordinador del Centro Universitario de la Ciudad de Uchiza de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; ha sido **Docente en Pre Grado** en la Universidad Alas Peruanas, Universidad San Pedro de Chimbote, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Autónoma del Perú, y Universidad César vallejo; y **Docente en Post Grado** en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Maestría y Doctorado), Universidad César Vallejo (Maestría), y en la Universidad San Pedro (Maestría y Doctorado). Ha sido Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Sihuas, en la Fiscalía Provincial Mixta de Pomabamba y en la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huaraz, Ha sido Fiscal Provincial Penal de Sihuas. Ha sido Coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, Filial Huaraz, y actualmente es Docente Tiempo Completo en la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, Filial Huaraz. Es asesor de tesis de pre y posgrado, en varias universidades del Perú. Es autor de un libro y, de varios artículos científicos y jurídicos, en revistas nacionales y extranjeras.

## LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS



**Irvin Castro M\*.**  
Universidad UMECIT, Panamá  
irvin2209castro@gmail.com

**DOI:** 10.37594/cathedra.n15.472

Fecha de recepción: 19/01/2021

Fecha de revisión: 25/02/2021

Fecha de aceptación: 17/03/2021

### RESUMEN

Las ciencias forenses, han jugado un papel importante dentro de la Administración de Justicia, en los innumerables delitos que a diario ocurren en nuestro país. La prueba científica ayuda a esclarecer muchas veces un hecho punible, sin embargo, el trabajo en equipo es fundamental con los demás intervinientes en el proceso (Ministerio Público, Policía Nacional, Órgano Judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), este último encargado de recabar la información forense, desde el lugar de intervención, ubicación, fijación, recolección, embalaje, traslado y análisis de los indicios en los laboratorios forenses de manera identificativa, cualitativa y cuantitativa para ayudar a identificar responsables de los hechos que se están investigando. Las ciencias forenses son cambiantes y se hace necesario una serie de capacitaciones y entrenamientos relacionados al uso de equipo forense, competencia de los peritos y las normas de calidad para poder enfrentar los diferentes avances delictivos que son utilizados por los grupos de delincuencia organizada en todo el territorio nacional. La aplicación de la cadena de custodia, cada vez que se descubre un indicio para garantizar la identidad, autenticidad, preservación, almacenamiento, seguridad, mismidad y continuidad del mismo desde su hallazgo hasta la disposición final, cuando el Fiscal encargado de litigar en juicio oral lo presenta como evidencia y dependiendo de su argumentación, su teoría de caso y el nivel de convencimiento ajustados a las normas y respeto del debido proceso, llega a ser valorado por la preservación, almacenamiento, seguridad, mismidad y continuidad del mismo desde su hallazgo hasta la disposición final, cuando el Fiscal encargado de litigar en juicio oral lo presenta como evidencia y dependiendo de su argumentación, su teoría de caso y el nivel de convencimiento ajustados a las normas y respeto del debido proceso, llega a ser valorado por el juez para tomar una decisión judicial; ya sea de culpabilidad o inocencia del acusado. Sin embargo, la participación pericial es importante al momento que el perito es interrogado por su actuación pericial en el proceso, la cual debe ser objetiva e imparcial, siempre recordando que es hombre de

---

\*Investigador de Escena del Crimen (CSI) Certificado por ICITAP-Capri/Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Perito Forense, Docente universitario.



ciencia en donde toda su actuación es verificable, ya que existen leyes y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional ajustado a las buenas prácticas forenses.<sup>1</sup> Ante la llegada de la pandemia (covid-19), se ha hecho necesario que se revisen y actualicen los protocolos científicos establecidos para la intervención en el lugar de los hechos, producto de muertes violentas o muertes sospechosas, como se establece en el código procesal penal y los protocolos propios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esta última ha enviado a todos sus peritos tanto de escena del crimen como de medicina legal que extremen las medidas de seguridad cuando deban acudir a la escena de una muerte violenta a recabar indicios y exista sospecha que el interfecto pueda ser portador del coronavirus. Dentro de las recomendaciones es obligatorio el uso de equipo de protección individual/personal (conocidos como EPI/EPP) y una vez desechados adopta nuevas medidas de seguridad, tanto en los equipos utilizados, vehículos y oficinas.<sup>2</sup>

**Palabras clave:** Ciencias Forenses, covid-19, criminalística, Lugar de intervención, protocolos, EPP.

## THE SCIENTIFIC EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

### ABSTRACT

Forensic sciences have played an important role within the Justice Administration, in the countless crimes that occur daily in our country. Scientific evidence helps to clarify many times a punishable act, however, teamwork is essential with the other participants in the process (Ministerio Público, Policía Nacional, Órgano Judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), the latter in charge to collect forensic information, from the place of intervention, location, fixation, collection, packaging, transfer and analysis of the evidence in forensic laboratories in an identifying, qualitative and quantitative way to help identify those responsible for the events that are being investigated. Forensic sciences are changing and a series of trainings and trainings related to the use of forensic equipment, the competence of experts and quality standards are necessary in order to face the different criminal advances that are used by organized crime groups throughout the world. The application of the chain of custody, whenever a clue to ensure the identity, authenticity, preservation, storage, security, sameness and continuity of the same from its discovery to final disposition is discovered, when the prosecutor in charge of litigation in trial It presents it as evidence and depending on its argumentation, its theory of case and the level of conviction adjusted to the norms and respect for due process, it becomes valued by the judge to make a judicial decision;

---

1 Manual de Procedimiento del Sistema de cadena de custodia del IMELCF (gaceta oficial 27831-A, publicado el 24 de julio de 2015 y la Gaceta Oficial 27838-A, publicada el 4 de agosto de 2015.

2 Protocolo de actuación para el abordaje de cadáveres de casos sospechosos o confirmados de infección por covid-19 con implicaciones medico legales 2020.



either guilt or innocence of the accused. However, the expert participation is important at the moment that the expert is questioned by his expert performance in the process, which must be objective and impartial, always remembering that a man of science where all the action is verifiable, because there are laws and protocols established at the national and international level adjusted to good forensic practices. Given the reach of the pandemic (covid-19), it has become necessary to review and update the scientific protocols established for intervention on the scene as a result of violent deaths or suspicious deaths, as set out in the Code criminal and proper protocols Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, the latter has sent all his experts both scene of the crime as forensic medicine to use extreme security measures when they must go to the scene of a violent death to gather evidence and there is a suspicion that the infected person may be a carrier of the coronavirus. Among the recommendations it is mandatory to use equipment individual / personal protection (known as EPI / EPP) and once discarded adopts new security measures both in equipment, vehicles and offices.

**Keywords:** Forensic Sciences, covid-19, Place of intervention, protocols, PPE

## INTRODUCCIÓN

Los casos de muertes violentas o muertes sospechosas, deben ser atendidos de manera oficiosa como lo establece la ley procedimental, en donde el Ministerio Público es el administrador de la investigación apoyado por dos (2) de sus cuerpos auxiliares Policía Nacional e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Estos a su vez tienen la responsabilidad de identificar personas, recabar los indicios que se encuentren relacionados en el lugar de ocurrencia del hecho delictivo y mantener la cadena de custodia de los indicios, así se encuentra estipulado en la ley 69 del 2007.<sup>3</sup>

Sin embargo, en ambos casos no existen protocolos establecidos para la intervención de los cuerpos auxiliares en los casos por covid-19 por tratarse de un hecho involuntario que afecta a todos los organismos policiales y de las ciencias forenses del mundo entero, lo que conlleva a que estos organismos incluyendo los nuestros lleven a cabo revisiones y actualizaciones de los protocolos y procedimientos existentes en donde primordialmente se tome en consideración la seguridad del personal que interviene en el sitio del suceso ya que; son los que están más en contactos con los elementos materiales probatorios que se puedan encontrar en el lugar de los hechos.

---

<sup>3</sup> Ley 69 del 27 de diciembre de 2007.

Es por ello que; las ciencias forenses son cambiantes, pero debe mantenerse inmersa las buenas prácticas forenses, ajustado a las normas forenses internacionales para evitar contaminación cruzada, destrucción de los indicios y alteración de los mismos y que posteriormente puedan ser utilizados en el juicio oral.<sup>4</sup>

Los términos procesales o judiciales se han tenido que ajustar a lo que actualmente está sucediendo a nivel global, recordando que los términos forenses ajustados a los protocolos no son iguales a dichos procesos judicial, por ejemplo, al momento de hacer un análisis identificativo por perfil genético de ADN.<sup>5</sup>

En ese sentido los análisis de los indicios físicos o biológicos que provengan de escenas del crimen o muertes sospechosas donde la víctima (occiso) sea positivo covid-19 deben ser almacenados con su cadena de custodia, en un lugar específico y seguro, para evitar contaminación de los funcionarios encargados del análisis de los mismos en los laboratorios forenses o cualquier otro que disponga el encargado de la administración de la Investigación.<sup>6</sup>

## DESARROLLO

Las ciencias forenses al servicio de la verdad y la justicia, son aplicables a nivel mundial. Cada uno de estos países ajustados a sus propios protocolos de actuación siempre y cuando no vayan en contra de la dignidad humana y no atenten contra los derechos humanos de las personas, incluyendo los manuales y protocolos establecidos por las colegios y asociaciones forenses internacionales, que sirven como guía para las buenas prácticas forenses desde la escena del crimen hasta el análisis de los indicios en los laboratorios con los que cuentan en determinado país.

Panamá, no escapa de esta realidad y es por ello que, dentro de los protocolos establecidos, se ha desarrollado el “protocolo de actuación para el abordaje de cadáveres de casos sospechosos o confirmados de infección por covid-19 con implicaciones medico legales”, en donde *el principal objetivo es establecer un protocolo de actuación para el abordaje multidisciplinario de los cadáveres de casos medico legales, ante la alerta epidemiológica de covid-19 en Panamá, tanto en el lugar de los hechos como en las morgues judiciales, documento que permita al Ministerio Publico y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el manejo, transporte, certificación de la muerte y disposición de los cadáveres acorde con las recomendaciones nacionales e*

---

4 Manual de buenas prácticas en la Escena del Crimen, grupo Iberoamericano de trabajo en la Escena del Crimen (GITEC).

5 Principio de debido proceso, Código Procesal Penal.

6 Artículo 304 del Código Procesal Penal.

*internacionales pertinentes con el propósito de cumplir con las disposiciones legales vigentes, pero también considerando los riesgos inherentes a la exposición directa o indirecta, de nuestros funcionarios al covid-19.*<sup>7</sup>

El presente artículo lo enfatizaremos en el abordaje del lugar de los hechos por parte de los especialistas en escena del crimen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; ya que, por ley son los únicos encargados en el procesamiento y análisis del lugar de los hechos, *“actividades de la investigación Artículo 273 del código procesal penal en la investigación se consignara y asegurara todo cuanto conduzca a la comprobación del hecho y a la identificación de los autores y partícipes de este. Así mismo se hará constar el estado de las personas, las cosas o los lugares, se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignaran sus versiones. Del mismo modo, si el hecho punible hubiera dejado huellas, rastros o señales se recopilarán, se tomará nota y se especificaran detalladamente y se dejara constancia de las descripciones del lugar en que el hecho se hubiera cometido del estado de los objetos que en él se encontraran y de otro dato pertinente”*.<sup>8</sup>

La especialidad de criminalística de campo, es la disciplina de la criminalística que emplea diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También se encarga de la recolección y embalaje de los indicios relacionados al hecho que se está investigando.<sup>9</sup>

La criminalística tiene sus objetivos en la cual se fundamenta, como los que podemos mencionar; investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho en particular y probablemente delictuoso, determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos u objetivos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlos, aportar evidencias o coordinar técnicamente o sistemas de identificación de la víctima, si existiera, aportar evidencia para la identificación de los posibles autores y coautores y aportar las pruebas materiales con estudios técnicos y científicos para probar el grado de participación de los autores.<sup>10</sup>

En base a lo antes plasmado, tomando como referencia la labor que realizan los especialistas en escena del crimen, podemos mencionar que dicha labor debe ser realizada cumpliendo con las normas de bioseguridad existentes para el abordaje del lugar de los hechos y sobre todo por

---

7 Página N. 2 Del “Protocolo De Actuación Para El Abordaje De Cadáveres De Casos Sospechosos O Confirmados De Infección Por Covid-19 Con Implicaciones Medico Legales”

8 Artículo 273, Actividades de la Investigación CPP.

9 González Moreno Rafael, (2006) Notas de un Criminalista, Tercera Edición, Editorial Porrúa.

10 Planas Vera, Nestor. (2004) Vademecum de Criminalística (Compendio de la Policía de Paraguay).

la seguridad del especialista encargado del dicho abordaje cumpliendo los protocolos forenses establecidos a nivel nacional e internacional.

Dentro los protocolos establecidos para minimizar cualquier afectación o contaminación de los especialistas dependiendo de los factores a los que se enfrenta, sean riesgos físicos, químicos o biológicos, deben tomar las medidas pertinentes para evitar la exposición.

La bioseguridad, juega un papel importante en el procesamiento de la escena del crimen; entendiéndose que; es el Conjunto de medidas preventivas destinadas a minimizar y controlar los factores de riesgos biológicos, físicos y químicos en las personas expuestas a ellas.

Por otro lado, existen niveles de exposición a los riesgos como los que podemos mencionar inhalación, contacto con la piel, inyección, ingestión y exposición a rayos x. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con fluidos corporales. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todos los intervinientes.<sup>11</sup>

Dentro de los parámetros de bioseguridad podemos mencionar el manejo del lugar de los hechos, lugares relacionados, cadáver/ociso, toma de muestras (intervenciones corporales), elementos físicos y elementos materiales probatorios; además de que, debemos considerar todos los elementos en la escena como potencialmente contaminados con sangre u otros fluidos corporales.<sup>12</sup>

Los cuerpos auxiliares deben contar con equipos de protección personal (EPP) que garanticen una prevención ante posibles elementos contaminados y así garantizar que el funcionario o colaborador se enferme con el mortal virus covid-19, por ende, las instituciones deben garantizar la dotación de dichos insumos a cada uno de los colaboradores que intervienen en el lugar de los hechos.

Una vez concluyan las actividades de la investigación dentro del lugar de los hechos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólidos, líquidos o gaseosos que presumiblemente presenten características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, contaminación de suelo, agua o atmosfera deben ser desechados en bolsas especiales de bioseguridad y de esta manera preservar la vida y medio ambiente en general.<sup>13</sup>

---

11 Módulo de Bioseguridad, de la Sección de criminalística de Campo, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

12 Guía del participante análisis y procesamiento del lugar de los hechos curso “CSI”, Icitap-Capri

13 Manual de Procedimiento del Sistema de cadena de custodia, del IMELCF.

Las ciencias forenses con el transcurrir del tiempo ha evolucionado para mejorar los servicios que brinda cada uno de los países que cuentan con las diferentes especialidades que conforman la criminalística, las buenas prácticas forenses en estos momentos de pandemia han sido la principal herramienta para prevenir contaminaciones cruzadas de los indicios y principalmente de los colaboradores que de manera objetiva realizan sus actividades periciales, buscando siempre el más mínimo detalle en cada uno de los lugares e indicios inspeccionados y analizados para el descubrimiento de la verdad.

El covid-19 ha llegado para cambiarnos la vida en todos los sentidos, es por ello que debemos estar a la vanguardia y aprender a subsistir con esta mortal enfermedad que ha cobrado vidas inocentes.

Las ciencias forenses forman parte de la justicia y le corresponde llevar a cabo el procesamiento y análisis del lugar de los hechos, además de los análisis respectivos de los indicios que por su clase y naturaleza ingresan a los laboratorios forenses para ser analizados con los equipos propios de las técnicas forenses, recordando que estos equipos son susceptibles a mantenimientos en temas de calibrage, descontaminación, uso de reactivos, entre otros.

Panamá, cuenta con un gran equipo forense en diversos temas periciales, cuenta con excelentes laboratorios, ajustados a normas internacionales de calidad como lo son las normas ISO/IEC 17025 y 17020, esto conlleva a que los forenses deben cumplir con las competencias requeridas para el procesamiento y análisis del lugar de los hechos y brindar ese servicio exigido principalmente por la sociedad que está deseosa de la justicia terrenal.

A manera de conclusión, Panamá cuenta con excelentes profesionales del ámbito de las ciencias forenses, los cuales están abocados al servicio de la verdad y la justicia en conjunto con los distintos intervinientes en el proceso, siempre debemos tener presente que si la ley te pide que opines como *perito*, *nunca dejes de ser un hombre de ciencia*, *tu misión no es vengar a nadie*, *no es de salvar a un inocente ó aniquilar a un culpable*, *es solo encontrar la verdad científica del hecho que se está investigando*.<sup>14</sup>

Con el desarrollo tecnológico alcanzado en las últimas décadas, la criminalística ha dado un giro trascendental en cuanto a la veracidad de sus resultados, respaldada por mayores elementos científicos, con una tendencia cada vez más especializada, de las cuales emergen diversas líneas de investigación, que han dado lugar a nuevos descubrimientos y por ende a nuevas técnicas, avaladas en la comunidad científica internacional.<sup>15</sup>

---

14 Notes GEORGES BURGUESS, American physicist, scientific writer and translator, expert on metallurgy.

15 Nociones generales de criminalística, Carmen Rosa Robles, Unión Nacional de Abogados de Panamá.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Leyes

- Ley 63 del 28 de agosto del 2008, Código Procesal Penal.
- Ley 69 del 27 de diciembre de 2007 que Deroga la Ley 16 de la Policía Técnica Judicial de Panamá.
- Ley 50 del 13 de diciembre de 2006 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

### Autores

- Calvo López, Pedro (2008), Investigación Criminal y Criminalística, En el Sistema Penal Acusatorio. Tercera Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá Colombia.
- González Moreno Rafael, (2006), Notas de un Criminalista, Tercera Edición, Editorial Porrúa.
- Grupo Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen (GITEC). (2012), Manual de las Buenas Practicas en el Lugar de los Hechos,
- Icitap-Capri (s/f), Guía del participante análisis y procesamiento del lugar de los hechos curso “CSI”, Icitap-Capri
- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, (2011) Manual de Procedimiento del Sistema de Cadena de Custodia, Primera Edición, Editorial Novo art S.A.
- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020), Módulo de Bioseguridad, de la Sección de criminalística de Campo, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Ministerio Público y Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2020), “Protocolo De Actuación Para El Abordaje De Cadáveres De Casos Sospechosos O Confirmados De Infección Por Covid-19 Con Implicaciones Medico Legales” del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Planas Vera, Néstor. (2004), Vandemecum de Criminalística (Compendio de la Policía de Paraguay).

## LABOR DE LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO EN PANAMÁ



**Ana G. Avila Arrocha**

Perito Forense

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Panamá

anagabrielaavila03@gmail.com

**DOI:** 10.37594/cathedra.n15.473

Fecha de recepción: 12/02/2021

Fecha de revisión: 15/02/2021

Fecha de aceptación: 27/03/2021

### RESUMEN

El trabajo de criminalística de campo no es muy claro para muchas personas que se encuentran en el ámbito de la administración de justicia y para la sociedad, por lo cual es necesario realizar una descripción de la labor que se realiza y los objetivos que se pueden cumplir por medio de la inspección técnica ocular. La inspección técnica ocular ayuda a la investigación de los hechos delictivos, fija el lugar de los hechos y nos permite recolectar información de la escena del delito, que nos permite orientar futuras decisiones en base a lo que probablemente sucedió en el hecho. La criminalística de campo es la primera aplicación científica que se proporciona a la investigación de un hecho delictivo, por lo cual es importante conocer lo que se realiza. La innovación y modernización ataca a todos los sectores y en especial a la criminalística que se encuentra en constante evolución, por lo cual es significativo evaluar los procesos y técnicas que se aplican para actualizarlos y mejorar la labor que se realiza y de esta manera obtener mejores resultados.

**Palabras clave:** criminalística, criminalística de campo, escena del delito, lugar de los hechos.

### WORK OF FIELD CRIMINALISTICS IN PANAMA

#### ABSTRACT

The work of a crime scene in Panama is not clear for the administration of justice and the society, that's why is necessary to make a description of the crime scene investigator's work, in a way that we can visualize the objectives that can be accomplish by making an inspection of the crime scene. The inspection of a crime scene can be very helpful for the investigation of a crime, because through the pictures we can record and collect information to make future decisions on the case. The inspection of the crime scene is the first scientific approach that is make in a case,



that's why is important to know about it. Innovation and modernization attack all sectors and especially criminalistics that is constantly evolving, so it is significant to evaluate the processes and techniques that are applied to update them and improve the work that is carried out and, in this way, get better results.

**Key words:** crime scene, criminalistics, crime scene investigator.

## INTRODUCCIÓN

La escena del crimen es un lugar en el cual se ha producido un hecho delictivo y es de importancia para la investigación, debido a que se convierte en una fuente de información para lograr conocer la verdad de lo sucedido. El trabajo de la escena del crimen o lugar de los hechos implica la participación de varios profesionales, entre ellos están los peritos de criminalística de campo.

La criminalística de campo es la encargada de la manipulación del lugar de los hechos, empleando diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También se encarga de la recolección y embalaje de los indicios relacionados con los hechos que se investiga. En concreto, es todo lo relacionado al manejo de la escena o lugar de los hechos, la observación, la fijación y la metodología entre otras cosas.

Los peritos de criminalística de campo realizan la inspección técnica ocular, siendo un proceso metódico, sistemático y lógico que parte de la observación integral del lugar de los hechos.

Debido a lo variante, compleja y extensa que se puede convertir una escena del crimen, el perito debe analizar todas las opciones posibles que puede utilizar en el lugar de los hechos, con el fin de poder procesar la escena completamente, lograr obtener la mayor cantidad de indicios que puedan ayudar con la investigación y embalarlos de manera que puedan ser preservados, para su análisis o almacenaje.

Las técnicas y procedimientos que se utilizan en el lugar de los hechos son procedimientos establecidos que cambian y son actualizados con el paso del tiempo, debido a que la criminalística está en constante evolución.

El sistema penal acusatorio es el sistema de justicia que se está aplicando en nuestro país; se trata de un sistema que da igualdad a las partes y oportunidades, imparcial y oral, basándose en las pruebas que pueden ser practicadas u obtenidas en el proceso para llegar a una decisión de

absolución o condena en el juicio oral.

Este sistema de justicia necesita la ayuda de la criminalística para poder recolectar pruebas que puedan orientar al juez a tomar una decisión basada en la persona acusada, “de este modo, se ha llegado a preferir más, que la prueba testifical, EL INDICIO que ha sido obtenido mediante la aplicación de los métodos científicos” (Locard, 1954). Por lo cual, es importante evaluar los procedimientos y técnicas que se utilizan en el procesamiento del lugar de los hechos y establecer la relación e importancia de la criminalística de campo con el Sistema Penal Acusatorio, y de esta forma resaltar el gran valor que aporta.

### ANTECEDENTES

Las investigaciones de la policía mantenían un alto grado de empirismo, uso de intuición y sentido común, en las épocas antiguas; por lo cual, no se obtenían resultados muy satisfactorios. El doctor Hanns Gross fue el primero en impulsar la adición de la ciencia a la investigación de los hechos delictivos con su obra magistral el Manual del Juez, en la cual se refiere por primera vez a los métodos de investigación criminal como criminalística, fue quien realizó orientaciones sobre la técnica de interrogatorio, el levantamiento de planos, utilización de peritos, entre otras cosas.

La criminalística se denominó como la ciencia que se ocupa del crimen, cuyo objetivo es: “Investigar técnica y científicamente hechos presuntamente delictuosos, identificar a sus autores, víctimas y demás involucrados, señalar los instrumentos utilizados y sus manifestaciones, reconstruir las maniobras que se pusieron en juego y aportar elementos de prueba a los órganos que procuran y administran la justicia.” (Luque, 1971, p. 29).

Esta disciplina fue creada para darle el valor científico a las investigaciones de los delitos, ya que mantiene protocolos, técnicas y procedimientos que parten del método científico, iniciando de la observación; adicional, le proporciona al juez información detallada de como posiblemente sucedieron los hechos desde una perspectiva sistemática. Actualmente, existen dos tipos de criminalística: la de campo y la de laboratorio. Siendo la de campo aquella disciplina que emplea diferentes métodos y técnicas para observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos; también se encarga de la recolección y embalaje de los indicios; ella es el inicio de la aplicación de la base científica para la administración de justicia.

La criminalística de laboratorio es aquella que utiliza todos los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios y evidencias en el lugar de los hechos o del hallazgo.

En Panamá, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una institución pública que presta los servicios de asesoría técnico-científicos como auxiliar a las instituciones de administración de justicia.

### **LABOR DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO**

La labor de la sección de Criminalística de Campo, la cual pertenece a la Subdirección de Criminalística dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene como función: proteger, observar y fijar de manera gráfica, escrita y fotográfica el lugar de los hechos. Procedimiento que realiza a través de diferentes métodos de búsqueda para ubicar y recolectar, con las técnicas adecuadas, los indicios según su clase y naturaleza, los cuales, posteriormente, son remitidos a los laboratorios para su respectivo estudio.

“La criminalística es un modo de presentar la prueba, en todo proceso penal y consiste en el análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable”. (Muñoz, 2000, pp. 135-144). El trabajo pericial de la Sección de Criminalística de Campo al recolectar indicios da inicio a una cadena de custodia, cuyo horizonte es garantizar la fidelidad, integridad, conservación e inalterabilidad de los diferentes elementos, los cuales podrán ser admitidos dentro del proceso por el juez y presentado en el juicio como medio de prueba.

### **LUGAR DE LOS HECHOS**

El lugar de los hechos es un espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal, con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron.

“Todos los pasos que se realicen en el lugar de los hechos deben ser calculados y metódicos para asegurar un resultado positivo. Por esta razón es que el personal investigativo debe tomar toda la información recolectada del reconocimiento general de la escena para desarrollar un plan sistemático y proceder con los esfuerzos de procesamiento. Un plan sistemático asegurara que nada se pase por alto y que ninguna evidencia importante se pierda en el curso de la investigación.” (Dutelle, 2011, p. 103).

Cada lugar de los hechos es diferente, aunque se trate del mismo delito, las causas y su desarrollo será distinto, por lo cual el perito debe aprender a desenvolver lo aprendido en la teoría para aplicarlo a la escena, nunca debe ser al revés debido a que la escena no debe modificarse para poder procesarla. Para ello se deben realizar pasos de forma sistemática, que nos ayudan a abarcar la escena completamente sin olvidar detalles o técnicas que se puedan aplicar. Siendo estos pasos

sistemáticos los siguientes:

- Protección del lugar de los hechos.
- Observación del lugar de los hechos.
- Fijación del lugar de los hechos.
- Fijación, recolección y embalaje de los indicios.
- Realización del informe correspondiente a lo realizado en el lugar de los hechos.

“Una vez el equipo interdisciplinario de investigación se presente al lugar de los hechos y antes de cualquier actividad, se hará un reconocimiento general visual del sitio a fin de adoptar el método preciso para que el trabajo de investigación se realice en forma ordenada, lógica e integral, garantizando que los elementos de prueba recolectados y presentados tengan validez ante la autoridad judicial que llevará el caso.” (Hernandez, p. 20).

Al llegar al lugar de los hechos, los peritos de criminalística de campo se organizan para designar funciones; uno de ellos se encarga de fijar el lugar de los hechos y procesar, mientras el otro realiza la entrevista con el afectado y apoya de igual manera, en el procesamiento del lugar de los hechos. Una vez designadas las funciones, se determina las medidas de bioseguridad que se utilizarán de acuerdo a las condiciones del lugar y delito para evitar la contaminación cruzada, se elige el método de búsqueda que mejor se adapte al lugar de los hechos para proceder a fijar y recolectar los indicios que se pudiesen encontrar.

### **INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR**

Consta de la observación meticulosa y aplicación de procedimientos en el lugar de los hechos, encaminado a describir el estado de las personas, lugares, huellas, rastros y todos los efectos materiales que sean de utilidad para la investigación. Es un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en la observación del lugar del hecho.

“Se trasladará al lugar y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.” (León, 2009, p. 146).

Esta diligencia es el trabajo de campo que se realiza en el lugar de los hechos para analizar los detalles que fueron dejados en la escena, de manera que podamos realizar una posible hipótesis

de cómo sucedieron los hechos, iniciando con la observación. Luego de esto, todos los datos recolectados y las vistas fotográficas tomadas se plasman e interpretan en un informe técnico para dar respuesta a la comisión enviada por la Fiscalía.

La inspección técnica ocular es una diligencia fundamental, pues a partir de ella se seguirá con éxito la investigación, debido a que ella tiene como propósito:

- Comprobar la realidad del hecho, delito o accidente, verificando la certeza o no de la denuncia.
- Demuestra todas las circunstancias que traten de ocultarse con el examen visual del lugar y determinación de daños ocasionados con la detección de señales y recolección de indicios.
- Demostrar la culpabilidad y responsabilidades, así como, cuantas circunstancias hayan concurrido en la comisión de los hechos.
- Determinación del *modus operandi*.

Esta inspección debe ser minuciosa y exhaustiva para evitar errores en el resultado del proceso investigativo, ejecutando una inspección ocular amplia y detallada del lugar del hecho.

Debe ser inmediata o realizada lo antes posible, a fin de evitar la desaparición, destrucción, simulación y las alteraciones o modificaciones, voluntarias o accidentales de los indicios.

Es directa debido a que nadie nos puede contar la diligencia o el informe. El perito que va a la escena es el que debe plasmar en soporte físico lo que ha visto y percibido en la misma.

Una vez comenzada la inspección ocular del lugar del hecho o escena del crimen no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas.

“Las operaciones que se realizan en el lugar del hecho deben ser coordinadas y dirigidas por un Licenciado en Criminalística quien, por su formación académica, se encuentra en condiciones de dominar todos los aspectos y campos de acción necesarios para su preservación, recolección, clasificación, custodia y análisis de las marcas del delito halladas en la escena del crimen, indicando el orden de trabajo de cada perito, las acciones a seguir, entre otros. Estas acciones deben ejecutarse tal y cual se indican en los manuales respectivos, lo cual asegura una correcta labor pericial, evitando contaminación que destruya la prueba o anule su valor probatorio.” (Esteller, 2014, pp. 9-12).

Los peritos de criminalística de campo, en Panamá, mantienen una formación académica en Criminalística, ya sea por el título de técnico, licenciatura o algún curso intensivo del tema, por lo cual están plenamente capacitados para procesar una escena del lugar de los hechos, cumpliendo con los protocolos establecidos. En el lugar de los hechos, siempre existe un perito líder, siendo aquel que dirige a los demás y designa los procesos a seguir.

La inspección se debe realizar con la finalidad de hacer valer la verdad científica, nunca se partirá de una hipótesis que pretenda que los hechos se adapten a esta, sino al contrario, será la hipótesis la que debe ajustar a los hechos.

### **CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.**

El sistema penal acusatorio ha sido implementado en Panamá, para mejorar el sistema de justicia y ha proporcionado varios cambios en los procedimientos y protocolos.

“Es un sistema adversario, conforme al cual, las partes (Ministerio Público, querellante si los hubiere y la defensa) se enfrentan a igualdad de oportunidades, ante jueces imparciales e independientes, que tomarán una solución de absolución o condena con base a las pruebas practicadas en la audiencia del juicio oral.” (Ministerio Público, 2009, p. 7)

Este sistema judicial ha cambiado la forma de administrar la justicia en Panamá, integrando la participación de las partes de forma equitativa e informándole de cada procedimiento que se realiza con respecto al caso. Disminuye, grandemente, el tiempo de investigación, evitando llegar a tener una mora de casos.

Este sistema consta de tres fases:

- Fase de investigación: el Ministerio Público es el ente que investiga el delito, ya sea iniciado de oficio, por denuncia o por querella; siendo quien investiga el delito, etapa en donde se solicitan todas las diligencias de investigación para elaborar la hipótesis del caso. Su objeto es procurar la resolución del conflicto si hay posibilidad, obtener toda la información y elementos de convicción, si los hay, para presentar una acusación.
- Fase intermedia: el Ministerio Público, con los elementos de convicción que tenga, puede pedir un cierre de la causa o formular una acusación, identificando el delito cometido y sus autores.
- Juicio oral: las partes debatirán en un Tribunal de Juicio, los hechos propuestos y las pruebas que haya admitido el Juez de Garantías.

“En efecto, la prueba pericial en el sistema acusatorio consiste en el testimonio que rinde el perito frente al juez, y no en su dictamen escrito (que se anexa al expediente para vista del juez y para ser consultado por las partes) como en el caso del sistema inquisitivo. Lo anterior implica que si el perito no rinde declaración en el juicio –ahora en calidad de testigo–, para explicar su hipótesis inicial, el método que aplicó en su estudio y sus conclusiones; utilizando términos claros y precisos para la audiencia, simplemente, no habrá prueba pericial.” (Hernández, p. 3)

Es muy importante la preparación del perito, ya que a través de ello se puede demostrar la idoneidad para realizar su trabajo, es por ello que su presencia en el juicio oral es vital, ya que debe sustentar sus acciones en el lugar de los hechos de forma que sea entendible para las partes y el juez, demostrando su idoneidad para realizar su labor, además de responder las interrogantes que pueden surgir con su participación.

Con la implementación de este sistema, se ha logrado un mejor manejo de los casos judiciales en Panamá, lo cual también ha llevado a que la criminalística de campo trabaje en una forma más rápida y eficiente, para poder cumplir con los términos de tiempos de investigación, establecidos en este nuevo sistema.

“Con la puesta en marcha del nuevo Sistema Penal Acusatorio panameño, el criminalista asume un rol importante en la investigación criminal, ya que se convierte en investigador-testigo, cuando tiene a su cargo el esclarecimiento de un delito. Por tal razón, el perito criminalista debe tener una formación profesional que involucra integridad, honestidad, calidad humana, actitudes, conocimientos y habilidades, que le capaciten e impulsen a la planificación, coordinación y controles de las actividades técnicas y científicas de todos los indicios o evidencias que se recolecten en un hecho criminal y, así, aportar las pruebas necesarias para esclarecer el hecho criminal, contribuyendo de esta manera a llevar a los delincuentes al banquillo de los acusados y a los inocentes a su liberación, buscando acercarnos a una sociedad más justa.” (La Estrella de Panamá, 2012).

Criminalística de campo juega un papel muy importante en este sistema, ya que a través de la criminalística se puede lograr comprobar la comisión del hecho delictivo e identificar a sus autores apoyándonos en la ciencia. Ella participa en dos fases importantes del Sistema Penal Acusatorio, en la fase de investigación, siendo este el momento donde se busca recopilar indicios e información para iniciar una teoría del caso que pueda encaminar la investigación y en la fase del juicio oral, donde los peritos son llamados para sustentar el peritaje realizado en el lugar de los hechos. Con



este nuevo sistema, los peritos deben defender el peritaje realizado ante el tribunal de juicio, por lo cual se debe tener una combinación de experiencia y conocimiento que lo llevará a sustentar sus procedimientos y técnicas sin dificultad.

“La cadena de custodia se convierte en un elemento muy importante en el Sistema Penal Acusatorio, ya que es el instrumento para preservar la evidencia hasta el juicio oral, en condiciones que permitan determinar que se trata del mismo elemento y que garanticen su autenticidad.” (Castro, 2016).

Para la justicia penal, la cadena de custodia ha tomado un gran auge, donde criminalística de campo juega un papel muy importante en este tema, debido a que, normalmente, forman parte de ella, con los indicios recolectados en la escena, convirtiéndolos en los responsables de garantizar la autenticidad de ese indicio. Es por ello, que se deben cumplir con los mayores estándares de calidad, conocimiento y experiencia para la manipulación de los mismos, ya que pueden ser convertidos en una prueba que puede determinar la comprobación de la realización de un hecho delictivo y la identificación de sus autores.

## **CONSIDERACIONES FINALES**

Podemos observar que la unidad de criminalística de campo, realiza un trabajo bastante complejo, en donde se aplican muchos procedimientos para la recolección de indicios y para garantizar la mejor evaluación del lugar de los hechos.

Al unificar los conocimientos, técnicas y procedimientos que se aplican actualmente y con una actualización constante del personal se puede hacer un trabajo de mayor calidad, obteniendo como beneficios:

- Estandarizar los procedimientos utilizados en esta área.
- Unificar las técnicas y procedimientos utilizados.
- Maximizar los procedimientos aplicables a la recolección de indicios.
- Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada perito, así como, la actividad de criminalística de campo, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.

La actualización de estos procedimientos ayudará a la formación de los asistentes de perito y peritos, desde un punto de vista teórico-práctico, lo que contribuirá a comprender, aplicar y mejorar las condiciones y la manera en la cual se realiza la labor de criminalística de campo.

El sistema penal acusatorio es un sistema que a través de sus procedimientos permite que las partes sean escuchadas para llegar a una conclusión del caso investigado, cumpliendo y respetando los derechos de las mismas. La criminalística agrega la parte científica que le permite establecer la comisión de un hecho delictivo y la posible identificación de sus autores.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ábrego, J. A. (2012). Criminalística Actual Ley, Ciencia y Arte. México: Ediciones Euroméxico, S.A. de C.V.
- Carvajal Meza, N. T., & Sepúlveda Riaño, H. D. (2019). Universidad Libre de Colombia. Obtenido de Universidad Libre de Colombia: <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15502/APLICABILIDAD%20DE%20LAS%20NORMAS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20POR%20PARTE%20DEL%20INVESTIGADOR%20CRIMINAL%20EN%20EL%20LUGAR%20DE%20LOS%20HECHOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Castro, D. d. (2016). Generalidades del Sistema Penal Acusatorio. Guía de Sistema Acusatorio. Panamá, Panamá, Panamá.
- Constain Chávez, M., & Constain Medina, A. (1963). Investigación Criminal. Bogotá: Temis.
- Dutelle, A. W. (2011). An Introduction to Crime Scene Investigation. Sdbury, Massachussets: Jones and Bartlett Publishers.
- Esteller, G. M. (2014). La Inspección Ocular y su Relación con el Proceso Penal. Revista No. 4 Skopein-Criminalística y Ciencias Forenses, 6-12.
- Fiscalía General de la República del Salvador. (s.f.). Manual de Procesamiento de la Escena del Delito. El Salvador: Talleres Gráficos UCA.
- Guzmán, C. A. (2011). Manual de Criminalística. Buenos Aires, República de Argentina: Euros Editores S.R.L.
- H Fox, R., & Cunningham, C. (1995). Manual para la investigación de la videncia Física y Requisa de la Escena del Crimen. Estados Unidos.
- Hernandez, A. (s.f de s.f de s.f). Academia. Obtenido de Academia: [https://www.academia.edu/6241296/Criminal%C3%ADstica\\_de\\_Campo\\_y\\_Laboratorio\\_I\\_TIPOLOGIA\\_DE\\_LOS\\_LUGARES\\_DE\\_LOS\\_HECHOS](https://www.academia.edu/6241296/Criminal%C3%ADstica_de_Campo_y_Laboratorio_I_TIPOLOGIA_DE_LOS_LUGARES_DE_LOS_HECHOS)
- Hernández, E. (s.f.). Academia. Obtenido de Academia: [https://www.academia.edu/34959302/Sistema\\_Penal\\_Acusatorio](https://www.academia.edu/34959302/Sistema_Penal_Acusatorio)
- IMELCF. (2014). Directorio de Servicios Periciales. Panamá.
- La Estrella de Panamá. (1 de febrero de 2012). Obtenido de La Estrella de Panamá: <https://www.laestrella.com.pa/opinion/redaccion-digital-la-estrella/120201/rol-perito->

investigacion-criminalistico

- León, H. P. (2009). La Investigación Criminal en el Sistema penal Acusatorio. Bogotá, Colombia: Editorial Leyer.
- Locard, E. (1954). Manual de Técnica Policiaca. Barcelona: Editor José Montesó.
- Luque, O. (1971). Elemento de la Criminalística. Bogotá, Colombia: Grupo Termis.
- Ministerio Público. (2009). 100 preguntas del Sistema Penal Acusatorio. Panamá. Obtenido de Ministerio Público: <https://ministeriopublico.gob.pa/sistema-penal-acusatorio/>
- Moreno, M. D. (2012). Criminalística Practica. Bogotá, Colombia: Editorial Temis, S.A.
- Moreno, R. (1997). Introducción a Criminalística. México: Porrúa.
- Moreno, R. (2011). Los indicios biológicos del delito. Mexico: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Muñoz, R. B. (2000). Criminalística, Peritos y Peritajes. Revista de Derecho, Criminología y Ciencias Penales No. 2, 135-144.
- Salvador, C. B. (s.f.). Academia. Obtenido de Academia: [https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/44241356/criminalistica-lugar-hechos.pdf?1459388931=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCRIMINALISTICA\\_MANUAL\\_MANEJO\\_DEL\\_LUGAR\\_D.pdf&Expires=1596156083&Signature=McgO94zGBoGPdG-15c-QcqM6hrCA~6lWHB1Q0zIK](https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/44241356/criminalistica-lugar-hechos.pdf?1459388931=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCRIMINALISTICA_MANUAL_MANEJO_DEL_LUGAR_D.pdf&Expires=1596156083&Signature=McgO94zGBoGPdG-15c-QcqM6hrCA~6lWHB1Q0zIK)
- Suboch, G. (2016). Real World Crime Scene Investigation: A Step by Step Procedure Manual. Florida: CRC Press.

## **NORMAS PARA AUTORES**

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citado son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

## **OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:**

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

## **TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA**

**1. Artículos:** son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:



- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

**2. Ensayos:** Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

**3. Artículos teóricos:** son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

## **PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS**

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

## **NOTA DE DERECHOS DE AUTOR**

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

## **DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD**

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

## **POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO**

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

## **PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)**

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

**IMPORTANTE:** En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

**COPYRIGHT:** Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

## RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

**Other cited rules are the following:**

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:



- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B., and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

## OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

## TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

**1. Articles:** they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

**2. Essays:** It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

**3. Theoretical articles:** they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

## **WORK DELIVERY GUIDELINES**

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

## **PRIVACY STATEMENT**

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

## **OPEN ACCESS POLICY**

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

## **ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)**

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

**IMPORTANT:** In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

**COPYRIGHT:** Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.  
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO  
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS  
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA  
254-1141**

**SEDE CHITRÉ  
996-4260**

**SEDE SANTIAGO  
998-0363**



**[www.umecit.edu.pa](http://www.umecit.edu.pa)**

**[revistas.umecit.edu.pa](http://revistas.umecit.edu.pa)**

**[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)**